

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 27º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-29845-2019
CARATULADO : PAVEZ/FISCO DE CHILE

Santiago, nueve de Junio de dos mil veintitrés

VISTOS:

En causa digital **Rol C-29.845-2019**, por presentación de fecha 07 de octubre de 2019, se presenta don Nelson Guillermo Caucoto Pereira, abogado, en representación convencional de **1.- don NELSON RICARDO VIVEROS LAGOS**, pensionado; **2.- doña SILVIA GIOCONDA PAVEZ RIVERA**, pensionada; **3.- don JAIME ANDRÉS MALAGUEÑO HORMAZÁBAL**, pensionado; y **4.- don LUIS ALBERTO RAMÍREZ MARTÍNEZ**, pensionado; todos con domicilio para estos efectos calle Doctor Sótero del Río N° 326, oficina 1104, comuna de Santiago, Región Metropolitana, y deduce **demanda en procedimiento ordinario de mayor cuantía de indemnización de daños y perjuicios (Juicio de Hacienda)** en contra del **FISCO DE CHILE**, representado por la Presidente del Consejo de Defensa del Estado, doña **María Eugenia Manaud Tapia**, abogado, ambos con domicilio en calle Agustinas N° 1687, comuna de Santiago, Región Metropolitana, a objeto que, conforme los antecedentes de hecho y consideraciones de derecho que esgrime, sea acogida en todas sus partes y en definitiva, se condene al demandado al pago de la suma total de \$600.000.000.- (seiscientos millones de pesos), desglosados en el pago de la cantidad de \$150.000.000.- (ciento cincuenta millones de pesos) para cada uno de los demandantes, por concepto de aquellos daños morales que han padecido con ocasión de los hechos cometidos por agentes del Estado, o bien, en su defecto, a la suma de dinero que el tribunal en justicia considere adecuada, cantidad que deberá ser reajustada de acuerdo a la variación del IPC, desde la fecha de interposición de esta demanda y el pago efectivo de la indemnización que en definitiva se establezca, junto con los intereses legales correspondientes durante el mismo período y el pago de las costas de la causa.

En folio 10 de la carpeta electrónica, consta que con fecha 24 de enero de 2020, se **notificó** personalmente a doña María Eugenia Manaud Tapia, Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, en su calidad de representante legal de la demandada Fisco De Chile, de la acción deducida en su contra.

En folio 13, se tiene por evacuado el trámite de la **contestación de la demanda** en rebeldía de la parte demandada.

En folio 18, consta que se tuvo por evacuado el trámite de **Réplica** en rebeldía de la demandante.

En folio 20, se presenta doña Carolina Vásquez Rojas, Abogado Procurador Fiscal (S) de Santiago del Consejo de Defensa del Estado por el



Fisco de Chile, persona jurídica de derecho público, quien evacuando el trámite de **Dúplica**, solicita el total rechazo de las acciones deducidas en su contra, conforme a los fundamentos de hecho y de derecho que expone, oponiendo, en primer lugar, la excepción de reparación integral, improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizados los demandantes; en segundo lugar, opone la excepción de prescripción extintiva de la acción civil de indemnización de perjuicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil y en **subsidio**, en caso que el tribunal estime que la norma anterior no es aplicable al caso, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil; también opone la excepción de cosa juzgada respecto del demandante don Jaime Andrés Malagueño Hormazábal; y **en subsidio de las defensas y excepciones precedentes**, opone las alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y los montos pretendidos, refiriéndose a la fijación de la indemnización por daño moral y luego a la improcedencia del pago de reajustes e intereses en la forma solicitada. En subsidio, de lo anterior, solicita rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

En folio 31, se **recibió la causa a prueba**, fijándose al efecto los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos y rindiéndose por las partes la prueba documental y testimonial que obra en autos. En folio 40, se agrega otro punto de prueba.

En folio 54, se **citó a las partes para oír sentencia**.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, en estos autos ha comparecido don Nelson Guillermo Caucoto Pereira, abogado y en representación de don Nelson Ricardo Viveros, doña Silvia Gioconda Pavez Rivera, don Jaime Andrés Malagueño Hormazábal y don Luis Alberto Ramírez Martínez, interpone demanda en procedimiento ordinario de mayor cuantía de indemnización de daños y perjuicios (Juicio de Hacienda) en contra del Fisco de Chile, representado por la Presidente del Consejo de Defensa del Estado, doña María Eugenia Manaud Tapia, abogado, a objeto que, en definitiva, se condene al demandado al pago de la suma total de \$600.000.000.- (seiscientos millones de pesos), desglosados en el pago de la cantidad de \$150.000.000.- (ciento cincuenta millones de pesos) para cada uno de los demandantes, por concepto de aquellos daños morales que han padecido con ocasión de los hechos cometidos por agentes del Estado, o bien, en su defecto, a la suma de dinero que el tribunal en justicia considere adecuada, cantidad que deberá ser reajustada de acuerdo a la variación del IPC, desde la fecha de interposición de esta demanda y el pago efectivo de la indemnización que en definitiva se establezca, junto con los intereses legales correspondientes durante el mismo período y el pago de las costas de la causa.

Funda su libelo transcribiendo en cuanto a los Hechos los relatos de proporcionados por los demandantes de autos y otras víctimas de:

1.- Relato de don Nelson Ricardo Viveros Lagos: “El día 27 de mayo de 1975, a la edad de 29 años, alrededor de las 09:30 horas, perdí mi libertad –por tercera vez durante la dictadura- cuando me encontraba desempeñando como profesor jefe, de un curso de alumnos con necesidades especiales, de tercer



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JWCLXFRKPEX

año de educación básica, en uno de los tres locales de la Escuela Consolidada de Experimentación de Santiago, dependiente del Ministerio de Educación, ubicado en el pasaje Quicaví, entre las calles Melinka por el sur y Petrohué por el norte, de la Población Miguel Dávila de la comuna de San Miguel (que hoy corresponde a la comuna Pedro Aguirre Cerda). Quienes efectuaron mi secuestro fueron dos militares de civil, que llegaron directamente hasta mi sala de clases, sin pasar por las oficinas del colegio, señalando que venían hacerme comparecer ante el Ministerio de Defensa, donde se requería mi presencia. Argumenté que debido a las características del curso a mi cargo, pequeños de poca edad (8, 9 años) y a sus características especiales – psicológicas, intelectuales y emocionales- debía informar a las autoridades del colegio, para que se hicieran cargo de los niños, por lo que les pedí a mis alumnos que esperaran y me dirigí a las oficinas, sin que los agentes – afortunadamente- reaccionaran. La responsabilidad de la jefatura de la sede estaba en manos de la profesora Florinda Fernández, recientemente designada en esas funciones por las nuevas autoridades superiores de la Escuela. Ante ella concurrí, explicándole que quienes me acompañaban me estaban conminando a presentarme ante el Ministerio de Defensa y le solicité que registrara el evento en la bitácora oficial del colegio, junto con los nombres de los agentes que me venían a buscar, quienes exhibieron para ello sus TIFA (Tarjeta de Identificación de las Fuerzas Armadas), pues le señalé que de no ocurrir esta situación mi ausencia podría ser considerada como abandono de funciones y, lo que era peor, arriesgar en forma irresponsable la seguridad de mis alumnos. Todo esto quedó establecido en la documentación oficial de la Escuela, en lo cual la Sra. Fernández debió oficiar de ministra de fe, tras lo cual debí salir con los agentes, quienes caminaban uno a cada lado mío en dirección de la salida ubicada en calle Petrohué, donde esperaba un vehículo (al parecer un sedán Fiat), con un tercer agente de civil al volante. Mi transitar hacia las oficinas y desde allí en dirección a la salida de calle Petrohué, lo efectué por el patio central del colegio, que tenía todas las salas de clase ubicadas en ambos costados, oriente y poniente, y porque mi sala se ubicaba en el extremo norte del costado oriental y las oficinas estaban en el extremo sur del colegio. Por esa razón la gran mayoría de mis colegas se percataron de lo que estaba sucediendo, al constatar presencia de personas que no eran apoderados (los agentes usaban traje y corbata y nuestra Comunidad Educativa se conformaba por familias de trabajadores y gente de esfuerzo). Tiempo después me enteré que la situación había originado gran conmoción, porque percibieron que algo grave estaba sucediendo, atrayendo su atención. Algunas de mis compañeras/os de labores que recuerdo fueron testigos de lo que estaba ocurriendo fueron, entre otras, Blanca Sagredo, Miryam Requena, Pilar Pedraza, Angélica Lagos. Una vez fuera del recinto escolar los agentes comenzaron a propinarme fuertes golpes de puño por ambos costados, recriminándome el haberlos hecho registrar mi aprensión y sus identidades, debido al dolor terminé siendo arrastrado al vehículo. Me sentaron al medio del asiento trasero, entre ambos agentes, y al enterarse de lo sucedido quién conducía se sumó a la golpiza, la que lejos de amainar se intensificó hasta hacerme desfallecer. Me pusieron cinta adhesiva sobre mis ojos (papel scotch) y unos lentes oscuros, ordenándome doblar mi cuerpo



sobre mis rodillas, sin cesar los golpes y amenazas de que no iba a salir con vida por mi actuar. El vehículo siguió un largo deambular por la ciudad, que debe haber tomado cerca de una hora, hasta llegar a un recinto el cual percibí auditivamente se encontraba en un lugar con caminos de acceso de tierra o de gran deterioro. Ingresamos por un portón que escuché abrirse, cruzando un sitio en donde se oía correr agua. Luego de ingresar me cambiaron la cinta adhesiva y los lentes oscuros por una espesa venda que se ató en mi cabeza, con la amenaza de que si intentaba aflojarla para poder ver me matarían de inmediato. Me hicieron pasar a una oficina o instancia similar en donde informaron a otras personas que se encontraban allí, mi nombre que quedó registrado y mi supuesto compromiso con acciones armadas. Desde 1967 yo era un militante del Partido Socialista y siempre detenté cargos sociales como dirigente estudiantil de la Escuela Normal en que me formé y posteriormente fui dirigente del magisterio, en mi colegio, de los profesores de los colegios experimentales y especiales (APEX), dirigente nacional de la Unión de Profesores de Chile (profesores de Educación Básica), el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, SUTE, desde su creación en 1969, y de la CUT Provincial de Santiago, responsabilidades que concentraban mi tiempo y capacidad. Luego de 1973, continué en labores destinadas a tratar de resistir social y sindicalmente, intentar de reorganizar el mundo laboral y asumí en el equipo del PS encargado de orientar y concretar esas tareas desde el partido, integrando su Departamento Nacional Sindical. Los cargos por los que me comenzaron a torturar desde el momento en que se me ingresó, al Cuartel Terranova de la DINA o Villa Grimaldi, eran de una inconsistencia e insania tal, que profundizaban mi sensación aguda de indefensión y temor. Pues no se referían a lo que efectivamente realizaba contra el régimen de abusos y sufrimientos extremos a los que sometía al pueblo. Me desnudaron, me amarraron a un catre de fierro y junto con salvajes golpes de pies, manos y objetos contundentes, me aplicaron descargas eléctricas en las partes más sensibles de mi cuerpo: párpados, oídos, genitales, estómago, ano, que me dejaban exhausto, exánime, desarrapado por el dolor horrible, la impotencia, en una agonía que parecía no tener fin, además del profundo asco y humillación que me provocaba mi orina y fecas que incontroladamente expedía en medio de la risa y burla de mis torturadores. Mi terrible situación se hizo más impactante cuando se me informa que he sido secuestrado y estoy siendo torturado por ser “ayudista” de la Coordinadora Nacional de Regionales del PS, escindida del Partido y con quienes mantenía contacto por los temas sindicales, en cuya acción nos encontrábamos constantemente, en nuestro afán compartido de levantar y organizar la resistencia del mundo laboral en los distintos puestos de trabajo, especialmente en el campo educacional, y no por mi adscripción y mis responsabilidades en el PS oficial. Al cabo de incontables horas de una larga agonía y sufrimiento, en las que perdí varias veces mi conciencia y la orientación espacio/temporal, me arrojaron como un guiñapo en un pequeño habitáculo de no más de un metro cuadrado de superficie, donde había una silla de madera, donde fue imposible sentarme y solo pude hacer descansar mis piernas sobre ella, tirado de espaldas en el piso. Lo que hacía más terrible esas primeras horas, fue escuchar los gritos desgarradores, al igual como yo lo había hecho, pero esta vez proferidos por otros seres



humanos sometidos al mismo trato cruel, doloroso y degradante que me había tocado experimentar. Eso me hacía revivir lo sufrido y pensar que estaba atrapado en un infierno de tormento interminable. Se me erizaba la piel y mi cuerpo temblaba. No tenía fuerzas ni para sollozar. Lo peor vino algunas horas más tarde, al caer detenido un compañero que señaló mis reales funciones partidistas y que poco tiempo atrás había colaborado con el equipo de tareas orgánicas internas del PS, para que pudieran encontrarse una alta dirigente del Partido, Fidelia Herrera, a quién conocía muy bien, con Ricardo Lagos Salinas, con quién habíamos trabajado en tareas de educación política partidista antes del golpe, y quien integraba el más alto equipo de Dirección del Partido, junto con Exequiel Ponce y Carlos Lorca. Los tres compañeros eran el objetivo principal de la DINA en su afán de destruir al Partido Socialista. Me fueron a buscar y se reinicia una agonía mucho mayor a la que ya había vivido. Soy sometido a una tortura salvaje que se prolonga por un tiempo prolongado que me hace perder el sentido del tiempo. En medio de ella aparece un alto oficial, por el respeto con que es recibido, quién después de consultar acerca de mí, con una voz gutural, que se oye provenir de una buena altura, dice que yo los estoy engañando y que mi nombre no es Nelson Ricardo Viveros Lagos, sino *Ricardo Lagos Escobar*, debido a la coincidencia de mi segundo nombre y apellido, que mi documento identificador es falso y que si no confieso lo que se me solicite, se me torture hasta morir. Este es quizás el episodio más terrible de la tortura, pues al renovado sufrimiento extremo se agrega la locura de tener que asegurar que uno es quien efectivamente es, mientras los que golpean inmisericordemente todo mi cuerpo, aplican prolongadamente corriente en todas las zonas corporales más delicadas y sensibles, insisten machaconamente que mi identidad es otra. Esto es mesiánico y supera la capacidad lógica, racional más elemental, creando una tremenda sensación de irrealidad, inasible intelectualmente, mientras tu cuerpo sufre a niveles extremos, sin que parezca existir solución posible a un sufrimiento que escala sin fin. Después de varios días de tortura quedé extraordinariamente mal, lo que hizo necesario trasladarme a una clínica clandestina de la DINA, ubicada en calle Huelén (como pude corroborar posteriormente), en donde permanecí varios días delirando, con fiebre y heridas infectadas en ambos tobillos. Estuve siempre vendado y amarrado a una camilla, de vez en cuando era visitado por un militar de edad (por su voz y conversación), de bajo rango (seguramente clase) que me hacía las curaciones. Hubo también presencia médica, pero solo en los momentos en que estuve peor, tremendamente afiebrado y confuso. A veces aparecían los torturadores amenazando con nuevos tormentos si es que aparecía alguna evidencia inculpatória. Si no me mataron o dejaron morir, estimo, que fue por las evidencias de mi secuestro que logré en el momento de ser detenido. Todo este período de agonía y sufrimiento lo compartimos, entre otros, con Luis Madariaga Jeria, Jaime Malagueño, Luis Ramírez; José Matta, Alfredo Duhalde, Pedro Matta Lemoine, de quién fui testigo de una querella similar que interpuso y ya fue resuelta por las Cortes Chilenas. Del mismo modo, quien suscribe, hizo presentación veraz y responsable ante la Comisión que encabezaba el Relator de Naciones Unidas, Sr. Alana, en New York en el año 1976, lo que debe constituir un *addendum* a esta presentación. Después de casi dos meses de secuestro y de una pasadía por 4 Álamos, pude recobrar



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JWCLXFRKPEX

el reconocimiento de mi existencia y ser visto por mi esposa, madre y padre. Había perdido más de 20 kilos, experimenté por más de medio año síndrome vertiginoso rotatorio, lo que me impedía desplazarme por mí mismo. Mis reclamos por recibir atención médica por un eventual daño cerebral o del oído medio, fueron desoídos o se armaban situaciones de mofa para quienes sufríamos enfermedades o daños provocados por la tortura. En ninguno de los campos de detenidos políticos en donde nos mantuvieron privados del contacto familiar, social, libertades y derechos fundamentales: Tres Álamos, Ritoque y Puchuncaví, terminé completando más de un año de secuestro y detención ilegal, arbitraria y abusiva, conté con asistencia médica para atender los severos y criminales daños que recibí de agentes e instituciones del Estado. Por el contrario, en ellos sufrí nuevos padecimientos físicos y psicológicos: enfermedades gastro intestinales, dislocaciones de brazos, hombros y piernas. Esto, sumado al trato cruel y degradante recibido en Villa Grimaldi, me originaron afecciones que se han prolongado hasta la actualidad, las que me tienen con severos efectos y limitaciones físicas y psicológicas, como lo son graves lesiones oculares que me han obligado a incurrir en ingentes gastos, hipertensión, diabetes y afecciones cardíacas, incluyendo un infarto al miocardio. También, daños en mi columna vertebral, hombros y codos, cuadros de angustias y depresiones. Eso es en lo personal, pero mi vida familiar, profesional, funcionaria y social experimentó adicionalmente severos efectos. Mi hogar que había logrado construir en 1973, cuando fui secuestrado en 1975 se debió liquidar completamente al carecerse de mi ingreso por mi esposa e hija pequeña (dos años): comedor, living, refrigerador, estufas, cocina, calefont, camas, menaje de casa, etc. Mi hija que había aprendido a caminar, controlar sus esfínteres y tener una vida de interrelaciones normales con el medio, experimentó un fuerte y repentino retroceso ante mi ausencia. Dejó de caminar, comenzó a orinarse y a tener relaciones hostiles y agresivas con otros niños y adultos. Mi esposa debió irse a vivir con sus padres ante la soledad e incertidumbre que provocó el no poder contar con la presencia y el apoyo mutuo material y afectivo de su compañero de vida, además del temor que le provocaba no saber de mí y lo que me estaba sucediendo. Luego de reconocerse mi condición de ex secuestrado y actual preso político, desde el segundo semestre de 1975 hasta junio de 1976, debió incurrir en nuevos gastos, esfuerzos, preocupaciones e incertidumbres para poder encontrarnos en los días de visitas en Quintero y Puchuncaví. Eso nos hizo aceptar la determinación de la condena de la DINA de tener que abandonar el país, vía el Alto Comisionado de Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR), que facilitó nuestra partida a los Estados Unidos de América, en junio de 1976, en donde nos volvió a tocar un nuevo período de tensiones y privaciones. Permanecer en un país que no es el propio, incluso del que fue instigador y responsable de la tragedia vivida en 1973 y los 17 años posteriores de dictadura, como lo probaron los “*hearings*” del Senado estadounidense, cuyo lenguaje, cultura y prácticas sociales son diametralmente difíciles y complejas, comportó otro duro proceso, originado también por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra nosotros en nuestra propia patria. Tratamos de construir un nuevo hogar que jamás resultó ser uno como deseábamos y pudiéramos disfrutar. Vivir una vida constantemente incierta, en una perpetua transitoriedad, sentirse en un



medio que no es el propio, que es además hostil y discriminador con las minorías étnicas en la cotidianidad existencial, en el trabajo, en el estudio, comporta un daño constante en las expectativas, condiciones y posibilidades familiares y personales. Eso impactó en la salud física y mental de nuestra familia. Mi esposa padeció crisis de pánico, dolencias reumáticas y motoras. Mi hija desarrolló una escasa tolerancia a la natural tensión y estrés que la vida plantea a todo ser humano. Nos aguantamos durante diez años, hasta decidir volver a Chile, en 1987, cuando se nos hizo imposible seguir soportando una vida que rechazábamos y nos hacía daño, aún a sabiendas que el dictador permanecía en el poder y no habían claras perspectivas de cambio, sino más rigor y amenazas. Otra vez debimos liquidar todo lo acumulado para vivir, a sabiendas que en Estados Unidos no se compra lo de segunda mano, salvo que sea a precio ridículamente bajo, reviviendo la sensación de dejar todo atrás. Reinsertarse en la patria no ha sido fácil. Vivo en una casa que es propiedad de un hermano y los costos de salud que debo cancelar, producto fundamentalmente de las causas que originan la presentación de esta querella, son muy elevados, y el sistema de salud pública sigue empantanada por los mismos intereses que empujaron y se beneficiaron del golpe y del sistema implantado por la dictadura cívico militar que permanece prácticamente inmutable. Los responsables de mi secuestro y tortura, al igual que cientos de otros chilenos y chilenas deben responder por sus crímenes de lesa humanidad. Su castigo refrendará la memoria, la verdad y la justicia. Por estos hechos dimos inicio a una querella criminal ante el Ministro Mario Carroza, con el Rol N° 1938-2019, Villa Grimaldi, Silvia Mazzella y otros, (Desacumulada rol 1384-2018)".

2. Relato de doña Silvia Gioconda Pavez Rivera: "Fui secuestrada el 26 de mayo de 1975, desde mi casa ubicada en el N° 6244, 2° transversal, comuna de San Miguel, aproximadamente a las 8:00 de la noche, por dos individuos que se identificaron como agentes de la DINA, diciéndome que los acompañara, una vez fuera de la casa, me empujaron a un auto pequeño de color rojo. Una vez dentro pusieron cinta adhesiva en mis ojos y encima una venda amarrada detrás de mi cabeza. El auto tomo un rumbo desconocido que calculo demoro una hora y media, mientras tanto me trataron con insultos vejatorios y amenazas. Luego llegamos a lo que después supe era la Villa Grimaldi. En seguida hubo un procedimiento de identificación por tres mujeres, con golpes e insultos. Luego me encerraron en una celda de 70 x 70 cms., donde solo se podía estar de pie o en cuclillas. Al día siguiente me condujeron a una sala de tortura y procedieron a amarrarme a una silla, propinándome golpe, quemaduras con cigarrillos, amenazas de muerte, de violación, abuso sexual y descargas eléctricas y diciéndole a mi esposo, el que se encontraba en esa sala, que me volverían a violar si no hablaba. Después fui conducida a un dormitorio donde había un camarote, allí estuve varios días. De vez en cuando me sacaban a la sala de tortura. Aproximadamente en junio comenzaron a sacar a todos los que llamaban prisioneros. Yo fui la última y la única liberada esa noche y dejada en medio de la Gran Avenida casi en el borde del toque de queda. Un taxista me llevó a mi casa. Luego de recuperarme en parte de las torturas me dedique a buscar a mi esposo, al ser él expulsado del país, el 20 de mayo de 1976, lo acompañe al exilio, el cual



duró más de 30 años, regresando a Chile recién en 2005. Sufrí consecuencias terribles, al punto que me destruyeron por dentro, por lo cual nunca pude tener hijos. Eso fue lo que más me costó. Me traumatizó mucho. Como daños patrimoniales sufrí también la pérdida de mis ahorros en la Asociación de Ahorro y Préstamo Cal y Canto por 27.900 escudos, además de la pérdida de las imposiciones por 12 años. Después del secuestro constatamos también que nos habían saqueado los agentes. Robaron un reloj, mi gargantilla, aros, e incluso la argolla de matrimonio que portaba cuando fui detenida. Físicamente el daño fue mucho mayor, producto de la tortura, además de la suspensión de un tratamiento de fertilidad al cual estaba siendo sometida, y se me ocasionó también un tremendo daño psicológico, que me sigue hasta el día de hoy con pesadillas, crisis de pánico, entre otras manifestaciones. Antes de partir al exilio me desempeñaba como profesora de estado en historia, geografía y economía y orientadora profesional, profesiones que no pude ejercer por razones de validación de estudios en Estados Unidos. Finalmente me recibí de educadora comunitaria, y en eso trabajé hasta pensionarme. Soy querellante por estos hechos en la causa Rol N° 1938-2019, *Villa Grimaldi, Episodio Silvia Mazzella y otros*”.

3.- Relato de don Jaime Andrés Malagueño Hormazábal: “Hacia mayo de 1973, era soltero, trabajaba como electromecánico de automóviles, y estaba vinculado políticamente al MIR en la clandestinidad. Desde el golpe de estado de 1973 la mayor parte del tiempo mi vínculo fue a través de Mario Maureira Vásquez, militante del MIR conocido como “Pato Malo” y muy buscado por la DINA en esos días; detenido desaparecido desde agosto de 1976 hasta la fecha. A fines de 1974 o principios de 1975, Maureira me contactó con otra persona que conocí con el pseudónimo de “Emilio”, el cual pasó a ser mi superior en la estructura política. Tiempo después “Emilio” me informó de una reestructuración orgánica en la cual me correspondía tomar contacto con alguien de una dirección local. Esta persona resultó ser Juan Rojas Martínez, con el cual tuve varios encuentros y con el cual acordamos un “punto” para inicios de mayo en la calle Victoria a las 10 AM caminando yo desde San Diego hasta Santa Rosa. En la fecha acordada Juan Rojas no llegó, dos días después tampoco. Decidí ir finalmente el domingo 11 de mayo de 1975. Al ir caminando hacia Santa Rosa me crucé con dos personas juntas en sentido contrario. Uno de ellos era delgado, semi rubio y estatura 1,7 m a 1,75 m aprox. El otro era bajo, macizo, pelo oscuro frondoso. Al sobrepasarme ellos se devolvieron rápidamente y me pusieron un arma apoyada a la cabeza, y otra en las costillas. Bajo amenazas fui obligado a caminar hacia un auto FIAT 125 estacionado entre otros vehículos. En el auto se encontraban otros dos agentes, una mujer joven que apuntaba con un fusil AK 47 y otro hombre de mediana edad que actuaba como jefe. A este último lo reconocí posteriormente como el agente de la DINA Tulio Pereira. El secuestrador de pelo frondoso era “El Troglo”, Basclay Zapata Reyes. Me subieron al asiento trasero entre dos agentes, luego me taparon los ojos con cinta adhesiva transparente “scotch” y sobre eso unos lentes. También me amarraron las muñecas por la espalda con una cuerda. Luego de pasar a cargar bencina a una estación de servicio cercana en Avenida Matta el auto subió por Av. Matta, Grecia y otras calles hasta llegar por la calle José Arrieta hasta la Villa Grimaldi. Pude darme cuenta



de esto porque logré soltar un poco la cinta sobre mis ojos pestañeando con fuerza. Durante el trayecto fui interrogado y golpeado. Al llegar a la Villa tocaron la bocina, un guardia miró por una ventanilla lateral y luego abrieron el portón. El auto se estacionó cerca de la casa principal por el costado de acceso a las oficinas. Me bajaron del vehículo y uno de los captores me desamarró las manos y estuve unos momentos de pie mientras los agentes conversaban entre ellos. Ingenuamente me saqué la cinta de los ojos y me puse a observar el entorno. Una agente que venía del sector de las torturas se percató y me pegó un fuerte puñetazo en los testículos y le gritó a mis aprehensores los cuales me dieron una golpiza en el mismo patio de la Villa. Vendado y amarrado nuevamente me llevaron al patio de la zona de las celdas, interrogado y golpeado por diferentes agentes. Después me encerraron en la “Corvi” y me asignaron el número 175 en reemplazo del nombre. En la tarde de ese día y pegando el oído a la pared pude identificar la voz de Juan Rojas que estaba siendo interrogado en la habitación contigua mientras alguien transcribía a máquina. Me di cuenta que Juan estaba quebrado psicológicamente por la tortura, por lo que de ahí en adelante los interrogatorios debía desmentir las imputaciones que tenía por sus declaraciones. Mi versión contra la de él. El segundo día me llevaron a una de las habitaciones de la casa donde pusieron unos focos potentes frente a mí y me quitaron la venda. Pude distinguir a tres mujeres detrás de los focos las cuales no me identificaron. La primera sesión de tortura fue en manos de Tulio Pereira, que reconocí por la voz como uno de los que me había capturado y otro par de subordinados. Me llevaron a la zona de la picana eléctrica (“parrilla”). En ese momento estaban torturando en el catre metálico a una mujer, por lo que a mi me empezaron a propinar golpes, rodillazos en la entrepierna, también asfixia producida al empujar y levantar contra un muro entre dos por la zona lumbar. En las pausas de la tortura a la mujer mis torturadores me hicieron sentar en una parte del catre, sin amarrarme, y aplicarme electricidad en diferentes partes del cuerpo. Al ser devuelto a las casas “Corvi” me dejaron en la más cercana a la puerta, en la cual había una silla de madera con asiento de totora. En este cubículo construido sobre la pared frontal original había una placa de ventilación hacia el exterior en la parte más alta. Al pisar en el respaldo de la silla alcanzaba a ver hacia afuera. Por eso pude ver el movimiento de los agentes y observar la circulación de otros detenidos, algunos de los cuales andaban a veces con la venda subida, pues eran encargados de tareas como el aseo o servir la comida a los presos en las celdas. Logré también separar el tejido de la tela que usaba de venda y podía simular que no veía hacia adelante. En días posteriores volví a ser interrogado y torturado por Tulio Pereira y al cuarto o quinto día fui llevado por dos agentes a la casa principal donde me presentaron ante “El Coronta”, Marcelo Moren Brito. Este me hizo una serie de preguntas estándar (¿Dónde está el *pituto*?; ¿dónde están las armas?; etc.) y otras más o menos relacionadas con los interrogatorios previos. A cada respuesta negativa me pegaba con un taco de billar desde el otro lado de su escritorio. Después de esto fui llevado a la sala aledaña a las “casas Corvi” donde habían escritorios con máquinas de escribir y donde un interrogador distinto preguntaba y tomaba nota teniendo a la vista otros informes tipeados. Si bien la tortura no parecía



ser el objetivo de este individuo sino ordenar lo ya obtenido en ella, de todas maneras hubo golpes y la práctica del “teléfono”, pegar con las palmas en los dos oídos simultáneamente. Esto me provocó problemas posteriormente. Al día siguiente o subsiguiente un grupo de cinco detenidos fuimos llevados a la zona de torturas y nos alinearon contra la pared frente a los baños. A la izquierda de los baños estaba la entrada al sector y “la parrilla”, a la derecha había un galpón en cuya entrada y amarrada a una viga había una rondana con una cuerda gruesa y al fondo, en una esquina, una bañera de fierro antigua con patas y al lado de esta un grifo de agua con mangueras *ad hoc*. El torturador principal en esta ocasión fue Osvaldo Romo. Los presos de turno eran Demetrio Hernández, Juan Rojas, un compañero de apellido Alarcón apodado “El Tortuga”, otro que no recuerdo y yo. Presencié la tortura de Alarcón por medio del colgamiento, el cual fue elevado, golpeado y mojado reiteradas veces. Cuando me tocó el turno me sentaron en un cajón frutero, me pusieron los antebrazos en la espalda y los amarraron junto con un pedazo de goma de neumático. Luego comenzó el interrogatorio. El “Guatón Romo” golpeando por delante y dos agentes tirando de la cuerda por detrás. En mitad de la sesión llegó Moren Brito, Krassnoff y otros “jefes” a buscar a Romo pues al parecer había un operativo importante. En el momento de estar contestando negativamente una pregunta a Romo, Moren Brito me dijo “Como que no sabís conchetumadre” y me pegó un manotazo en la cara tirándome al piso. Pasé un par de días más en las “Corvi” y luego algunos fuimos trasladado a la “casas Chile”, construcción de madera agregada al extremo de la casa original. Ahí me compartí la celda con [no figura nombre] Pizarro hasta que nos trasladaron a Cuatro Álamos. Durante el secuestro en Villa Grimaldi reconocí por la voz y de vista a otros detenidos. Relacionados con el mismo hecho represivo de mi detención estaban Juan Rojas Martínez, quien dio mi ubicación, Demetrio Hernández Mandiola, a quien conocía desde antes y reconocí la voz, “Juan”, un poblador vinculado a Juan Rojas y que el Guatón Romo liberó desde la Villa, “Emilio”, quién fue detenido antes que yo e ignoro quién lo entregó. Esta persona fue torturada y estuvo dos o tres meses preso y fue liberado extrañamente desde el campo de Ritoque, mientras el resto de los *miristas* del mismo caso y de menor nivel orgánico seguimos presos hasta el fin del estado de sitio. Esto y otros hechos conocidos posteriormente me hacen sospechar que esta persona podría haber sido un infiltrado de un organismo distinto a la DINA. Otros presos relacionados con este golpe represivo y que no conocía con anterioridad son: [no indica nombre] Alarcón, Daniel Herrera, los hermanos Vladimir y Washington Fernández, Patricio Solar, [no indica nombre] Loayza, [no indica nombre] Opazo, [no indica nombre] Lama, Roberto Castillo, [no indica nombre], Pizarro, [no indica nombre] Gallardo, y otros que no recuerdo ahora. Pude ver también en Villa Grimaldi y Cuatro Álamos a varios detenidos no relacionados con mi caso de los cuales pude identificar a Ricardo Frodden, Claudio Zaror, Lautaro Videla, el colaborador de la DINA “Joel” de apellido Iribarren. Se produjo un traslado masivo de presos desde la Villa a Cuatro y Tres Álamos debido al cercano arribo a Chile de una Comisión de DDHH de la ONU. En estas circunstancias fuimos trasladados más de 20 personas vinculadas al MIR y al Partido Socialista vinculados al mismo hecho represivo en la zona sur de Santiago. En Cuatro Álamos yo estaba en muy malas



condiciones físicas, perdía el equilibrio y me desvanecía. Gracias a mis compañeros que me sostenían disimuladamente logré pasar a Tres Álamos. Era sabido que al estar con secuelas muy evidentes de tortura quedabas retenido en Cuatro Álamos o regresado a la Villa. Al pasar el grupo a Tres Álamos fuimos recibidos por el jefe del campo Conrado Pacheco. Me preguntó porque no podía estar de pie y le contesté que era producto de las torturas en Villa Grimaldi, se burló diciéndome que las FFAA chilenas no torturaban a nadie. Nos asignaron un par de celdas para todo el grupo. En la tarde de ese día volvía perder el sentido tanto en la celda como en el baño con relajación de esfínteres. Los representantes de los presos pidieron a la guardia que me llevaran a un hospital pero eso fue negado. Al final los mismos presos con conocimientos médicos me atendieron a mí y a otro compañero que tenía síntomas similares. Nos aislaron en una celda pues pensaban que podía ser una enfermedad infecciosa como el cólera. Nos recuperamos. Permanecimos alrededor de un mes en Tres Álamos y luego fuimos trasladados a Ritoque y luego a Puchuncaví cuando Ritoque se cerró como campo de concentración. Permanecí en Puchuncaví hasta el término del estado de sitio en noviembre de 1976 siendo liberado desde Tres Álamos”.

4.- Relato de don Higinio Espergue Córdova: “Fui detenido por la DINA el 3 de abril de 1975, a las 24 horas aproximadamente en la vivienda que arrendaba junto a mi pareja que se encontraba embarazada y con síntomas de parto, en ese momento la casa es rodeada por numerosos hombres armados que ingresan violentamente a la vivienda procediendo a golpearme al tiempo que insultan y agreden a mi pareja. El comando estaba a cargo de Osvaldo Romo, nos separan, me amarran y vendan, soy tirado al piso de la camioneta y golpeado durante el trayecto. Siento que la camioneta se detiene y luego ingresa por un camino ripiado, me bajan y preguntan mi nombre real, pues ya tenían la información sobre mis actividades y nombre político. Puesto que antes había sido detenido Luis Ramírez Salazar y le habían torturado en presencia de su madre para que me entregara. Luis se encontraba herido de bala en una pierna, pues un día antes de mi detención los llevo a otra casa y en un descuido de los agentes de la DINA, intento fugarse. Una vez que Osvaldo Romo confirma mi identidad, de inmediato me llevan a una sala donde soy golpeado y torturado con corriente, atándome desnudo a un catre metálico, no sabía que pasaba con mi pareja embarazada y si había nacido mi hijo y esto fue usado contantemente para presionarme incluida toda mi familia, producto de los golpes y la corriente quedaba inconsciente, después de ser torturado me llevaban a un celda de madera de un metro por un metro aproximado donde habían dos a cuatro personas hacinadas, esto se repitió por varios días. Posteriormente paso a otra celda de madera donde habían más prisioneros que eran sacados a torturas y volvían en condiciones físicas y mentales deplorables en esas condiciones nos apoyábamos mutuamente, cuando nos llevaban al baño, me percate que habían otros compañeros y compañeras detenidas, como Ana María Jiménez, un compañero dirigente sindical de apellido Salas y Lautaro Videla. Después de varios días aproximadamente, me trasladan a otro recinto que después supe se llamaba Cuatro Álamos, y posteriormente a Tres Álamos. Estando en Tres Álamos conversando entre los prisioneros fuimos identificando el lugar donde



estuvimos secuestrados y torturados. De Tres Álamos junto a otros compañeros se nos trasladó al campo de detenidos de Puchuncaví de la Quinta Región”.

5.- Relato de doña María Margot Fuentes Medina: “El 9 de septiembre de 1976, a las 14 horas fui secuestrada desde mi trabajo en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Dos detectives de Investigaciones me obligaron, revólver en mano, a seguirlos hasta un auto blanco marca Peugeot 404. El funcionario que dirigió el operativo era de apellido Sotomayor, llegó a ser Prefecto de Investigaciones de Santiago. Fui conducida con la vista vendada al Cuartel de Investigaciones del barrio Chacabuco de Valparaíso, donde comenzó el interrogatorio que fue desde su inicio con malos tratos: puñetes, cachetadas, puntapiés, luego me llevan a una estrecha celda donde me aplican intensas luces en los ojos y continúan con el interrogatorio. Permanecí toda la tarde y parte de la noche en una celda mojada, pasada a orina y excremento, sin agua y sin comida. Muy de madrugada fui sacada de la celda con destino a Santiago. Viajé debajo del asiento trasero del vehículo, con la vista vendada y las manos atadas a la espalda. Llegamos a un lugar donde subí por una escalera con pisos muy limpios, logré verlos cuando la venda se corrió, ese lugar se conoce como la “Venda Sexy”. En el proceso Rol N° 728-2010 hay testimonios de mi secuestro en ese sitio. El interrogatorio fue violento, con aplicación de electricidad en los pechos, con las manos amarradas a una silla; me levantan del suelo, me desnudan, fui golpeada salvajemente por agentes de la DINA, e inician un partido de fútbol en que la pelota soy yo, donde recibo patadas (chutes) y golpes en todo el cuerpo. Fui además colgada del techo amarrada del brazo izquierdo, no sé cuánto duró porque me dormí. Quedé con secuelas en mi espalda y brazo izquierdo de por vida. Desde que fui secuestrada en mi trabajo fui interrogada sin tregua, exceptuando el par de horas que duró el viaje a Santiago. En la Venda Sexy acepté que mantenía relaciones (políticas) regulares con compañeros del partido en Santiago. Fui conducida en vehículo a reconocer el lugar de las reuniones, no pude dar con él y fui trasladada a Villa Grimaldi, amarrada de manos y con los ojos vendados. Tuve largos interrogatorios con amenazas directas contra mi familia que vivía en Río Bueno. Aquí fui golpeada en la espalda y la cabeza con un madero que parecía fierro de lo duro. Quedé con secuelas en los huesos. Posteriormente fui trasladada a Cuatro Álamos, donde volví a sufrir malos tratos. Permanecí sola en una celda de cemento sin nada para recostarse o sentarse, casi enseguida me desmayé, los guardianes asustados me trajeron comida y me inyectaron un producto desconocido que me ha dejado un hematoma permanente en el glúteo. Un par de horas después fui trasladada al Pabellón de Mujeres de Tres Álamos, porque habían secuestrado a muchas personas manifestantes por motivo del 11 de septiembre y el lugar estaba sobrepoblado. Llevaba un tiempo en Tres Álamos cuando una tarde fui sacada por una carcelera para ser llevada a Cuatro Álamos para ser interrogada por una comitiva de la que finalmente quedó una sola persona que usaba un delantal blanco. El interrogatorio se desarrolló en un espacio cerrado, donde permanecí por un tiempo que no recuerdo. El interrogador utilizaba lenguaje técnico del ámbito psiquiátrico. Me regresaron a Tres Álamos donde fui recibida con alegría y vítores por mis compañeras presas. Luego de ser liberados todos



los prisioneros políticos a fines de noviembre de 1976, cuando se abrieron todos los centros de detención, los prisioneros políticos fuimos a entregar nuestros testimonios a la Vicaría de la Solidaridad. Regresé a Valparaíso, retomé mi trabajo en el Hospital Carlos Van Buren donde fui agredida verbalmente por mis compañeros de trabajo. Esta situación se mantuvo por largos años hasta que decidí cambiarme de sección en el mismo hospital. Al mismo tiempo me di cuenta que estaba siendo objeto de seguimiento por agentes de la DINA. Decidí trasladarme a Santiago en 1983, donde el seguimiento continuó hasta 1989. Hoy día, con el paso del tiempo, tengo vacíos y no logro recordar algunas situaciones dolorosas, pero otras aún las tengo en la memoria, como lo sucedido un día después del golpe en el Hospital de Río Bueno, cumpliendo con un llamado por la radio local acudí a la comisaría de Carabineros de Río Bueno donde fui interrogada por más de seis horas. Regresé a mi casa muy asustada, volví al trabajo, muchos de mis compañeros ya no estaban; esto fue una tortura psicológica. A principios de octubre de 1973 fui emboscada por un grupo de jóvenes de Patria y Libertad, quienes me insultaron y lanzaron piedras que me hicieron sangrar. Pude huir corriendo hasta mi domicilio, donde mi madre me protegió y sugirió que agilizara mi traslado a Valparaíso, que ya estaba aprobado. En Valparaíso continué con mi trabajo político clandestino contra la dictadura, con jóvenes de la Universidad Católica y la Universidad Santa María. Las huellas, las cicatrices, están en el alma. Se aprende a vivir con el dolor, pero es un proceso complejo y contradictorio”.

6. Relato de doña Ana María Jiménez Morales: “Fecha y lugar de la detención: Fui detenida en la calle, el 11 de abril de 1975. Iba en un micro y me detuvieron en la parada de Teatinos con Alameda, ya que habían situado en la calle a personas que me conocían y sabían que yo pasaría por allí en una micro de un recorrido que no recuerdo a las 15:00 hrs. Me apuntaron con una pistola por la espalda y ordenaron al chofer cerrar las puertas y conducir hasta la calle Valentín Letelier. En la micro iba otro compañero, José Carvajal Loyola y alcanzó a subir Víctor Maire Orrego, hermano de mi esposo. Ambos quisieron intervenir y fueron igualmente detenidos. En la misma calle me pusieron scotch en los ojos y un par de lentes de sol encima. Me tomaron del brazo hasta llegar al auto estacionado muy cerca, creo que no más allá de una cuadra, subieron dos agentes a mi lado y me arrojaron al piso del auto, poniendo los pies encima de mí y dándome patadas. Cuando llegamos al lugar donde íbamos, al cabo de un tiempo que me pareció bastante largo, se anunciaron con bocina y sentí que se abría un portón de hierro. Bajamos del auto donde parecían esperarnos porque daban grandes gritos de alegría. Casi en seguida me pasaron a una sala donde comenzaron las torturas (que detallaremos aparte). El lugar era el Cuartel Terranova (Villa Grimaldi), donde permanecí secuestrada por la DINA durante 16 días. De allí me llevaron a Cuatro Álamos, un recinto de incomunicación, también de la DINA, por dos días y finalmente a Tres Álamos, donde permanecí 19 meses más. O sea, el total de mi detención fue de 1 año y 8 meses, en los cuales estuve sin cargos ni acusaciones legales, como todas o la mayoría de mis compañeras de prisión. Entre mis secuestradores estaba Osvaldo Romo. Mis torturadores fueron Romo (el Guatón) Basclay Zapata (el Troglo), y en otras ocasiones, además de dirigir los



interrogatorios participaba directamente en la tortura Miguel Krassnoff Martchenko. Algunas veces, nos sacaba al baño Rosa Humilde Ramos (la comandante), quien llevaba a cabo otras torturas. También en alguna ocasión estaba en las sesiones Ricardo Lawrence. Tipos de torturas a las que fui sometida. Desde que llegué me mantuvieron con la venda en los ojos y esposada. Me sentaron en una silla donde me empezaron a interrogar: mi nombre, profesión, militancia [...] Cuando dije que ninguna me dieron un golpe de puño en la mandíbula inferior, tan violento que fui a parar al piso con silla y todo. Sentí un dolor inmenso, la sangre en mi boca y los dientes que me sacaron. Inmediatamente me sacaron la ropa a tirones y me ataron desnuda a un somier metálico, donde me sometieron a descargas eléctricas en la boca, oídos, pezones y vagina, hasta hacerme sangrar. Entretanto me preguntaban por compañeros. No sé cuánto tiempo duró este tormento, solo sé que entré como a las 16:00 hrs y cuando me sacaron estaba oscuro. Me dejaron en una de las llamadas casas Corvi hasta el amanecer. La segunda sesión de tortura comenzó con golpes en los oídos que me dejaron casi sorda y luego se repitió la cama metálica, esta vez con un fuerte contenido sexual. El Romo se masturbaba y eyaculaba encima de mi cara y me obligaba a golpes a abrir la boca. Me hacía secarme el vómito con un trapero, y luego comenzaba nuevamente la picana. En un momento entró el Troglo acompañado de mi esposo Jorge Maire Orrego y lo golpeaba para que me hiciera colaborar. Él sólo lloraba. Luego seguía la corriente hasta que perdías el control de esfínteres y ahí te desamarraban y te bajaban a golpes e insultos: perra, puerca, sucia, etc. Todo esto acompañado de música de moda en la radio. Esto se repitió en otras ocasiones aunque a veces el de las vejaciones sexuales era el Troglo, y el de la electricidad, los golpes y los interrogatorios entre uno y otro los hacía Krassnoff. Lo más denigrante era salir de allí arrastrándote, sangrando y llena de orines y caca, hasta una pileta que estaba al lado, donde me pasaban nuevamente un trapero para limpiarme con muy poca agua, con la prohibición estricta de beber porque te morías. En otras ocasiones llevaban a mi interrogatorio a Luis Ramírez, la persona que me había entregado, para convencerme de que hablara, como había tenido que hacer él, porque ya estábamos derrotados. La tortura era permanente porque cuando no te interrogaban escuchabas los gritos de dolor y llantos de otros compañeros/as. O el miedo a la espera de cuando te llamaban otra vez, o a agarrar una infección vaginal o en los pechos, siempre sangrando. Una noche de fuerte lluvia la llamada "Comandante" quería que yo cantara para entretenerlos y como me negué me dejó hasta el otro día bajo la lluvia. Con la angustia se me caían mechones de pelo y en una oportunidad se mofaron de mis pelones y empezaron a quemarme el pelo con fósforos y la cabeza con cigarrillos. Estas prácticas sucedieron varias veces durante los días de terror que permanecí en la Villa. En resumen, puedo nombrar golpes, patadas, quemaduras, la parrilla (sesiones de corriente), apremios y abusos sexuales, interrupción del sueño a cualquier hora, ir al baño una o dos veces al día siempre con guardias armados y la puerta abierta, amenazas permanentes de llevar a tus familiares. También se preocuparon de atacar mis oídos al saber que fui estudiante de música, con el propósito de causarme mayor daño. Tiempo de detención: En total permanecí detenida ilegalmente 1 año y 9



meses, entre Villa Grimaldi, Cuatro Álamos y Tres Álamos. Mi salida fue al cierre del campo en diciembre de 1976. En abril de 1977, salí al exilio a Francia por decisión propia, ya que había nuevamente empezado a tener seguimientos y amedrentamientos. Sin embargo, estando en París y a través de la Embajada de Chile en Francia, me entregaron la información de que tenía prohibido regresar a Chile y que mi pasaporte tenía la letra L. Esta prohibición se levantó sólo con el plebiscito y el retorno de la democracia. Volví a Chile por primera vez en 1990 y de manera permanente en 2007. Perdí casi todo lo que tenía en la casa que arrendaba, en los allanamientos: muebles, equipo de música...etc. En términos materiales lo más grave fue perder la parcela que mis padres habían comprado a un pariente en La Calera. El hombre era un colaborador de la dictadura y valiéndose de triquiñuelas legales, se apropió nuevamente de la casa. Con mi padre muerto, nada podíamos hacer. Cuando regresé a Chile intenté recuperar mi parcela pero pese al apoyo de abogados de DDHH, no fue posible. Daños físicos y psicológicos productos del secuestro y torturas - Pérdida de la mayor parte de mis dientes. - Alopecia traumática: perdí las tres cuartas partes de mi cabello. A través del PRAIS solicité reparación del COMPIN y me otorgaron una prótesis capilar anual de forma vitalicia. - Perdí el oído: totalmente el izquierdo y un 35 por ciento el derecho. Me entregan, por el mismo sistema mencionado arriba, un audífono cada 3 años. - Problemas cardíacos: Tengo una angina inestable de pecho. En el 2007 tuve un infarto al miocardio, que fue tratado en Cuba. - En el 2004 tuve un infarto cerebral, igualmente tratado en Cuba. - Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y Asma. Severos problemas respiratorios. *(Se adjuntarán certificados médicos)*. Al momento de ser secuestrada estudiaba Pedagogía en Música en la Universidad de Chile. En el exilio trabajé como encargada de cultura de la Casa Memorial Salvador Allende de Cuba. Al regresar trabajé en formación de coros y talleres de música. Hoy vivo principalmente de la pensión Valech”.

7. Relato de don Luis Guillermo Ramírez Salazar: “Mi nombre es Luis Guillermo Ramírez Salazar, soy obrero metalúrgico y este es un esbozo del relato de mi detención. Fui detenido durante el mes de abril de 1975 por la DINA. Fui llevado a un centro de detención donde fui torturado salvajemente, en presencia de mi madre. Averiguaría posteriormente que se trataba del Cuartel Terranova o Villa Grimaldi de la DINA, donde cientos de personas sufrieron torturas de todo tipo. Estando detenido, la DINA me trasladó a un comuna de Santiago para identificar la casa de un compañero, en ese momento intente darme a la fuga y fui baleado en la pierna. La DINA me traslado al mismo recinto de detención, y continuó con las torturas, incluyendo torturas con electricidad aplicada directamente sobre la herida a bala. La vida en ese lugar es lo peor que puede experimentar un ser humano. La verdad es que me cuesta mucho hablar de esto todavía por el dolor y las secuelas imborrables que me ha traído. Desde el cuartel Terranova me trasladaron a Cuatro Álamos y luego a Tres Álamos. Finalmente, la autoridad *de facto* dispuso enviarme a al campo de detenidos de Puchuncaví, donde estuve aproximadamente un año”.

Se remite luego al **Derecho**, asegurando que **los hechos relatados encuadran en un crimen de lesa humanidad** reconocido en la comunidad internacional como de *lesa humanidad* según lo establecido en el artículo 6, literal C del Estatuto del Tribunal Militar de Núremberg de 1945,



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JWCLXFRKPEX

declaración confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de la Naciones Unidas con fecha 13 de febrero y 11 de diciembre de 1946 y que ha sido ratificado con la adopción del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998, que refleja el desarrollo del Derecho Penal Internacional. Indica que estos crímenes ignominiosos e intolerables para la humanidad han hecho surgir un complejo normativo especial en el ámbito del Derecho Internacional, cuestión que resulta fundamental a la hora de resolver qué clase de responsabilidad le cabe al Estado de Chile en el caso de autos. En tal sentido cita jurisprudencia de la ltima. Corte de Apelaciones de Santiago y agrega que, por su parte, esos hechos no sólo configuran tortura en los términos del artículo 1 de la Convención contra la Tortura, sino que específicamente corresponden a violación y otras formas de violencia sexual han sido reconocidos como una forma de tortura de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, y también como tipo penal autónomo en los términos del artículo 7(1)(g) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Adiciona que el Informe de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura (Informe Valech I) señala sobre lo indicado: “Ha parecido necesario destacar separadamente la situación de violencia sexual que afectó a las mujeres detenidas, tomando en consideración las características de esa violencia, además de su significación moral y cultural en la sociedad chilena. Durante siglos, la violación sexual y todas las formas de violencia sexual contra las mujeres eran consideradas como situaciones inevitables y casi normales en las guerras y conflictos políticos armados. Es más, la violación era una conducta más de agresión contra los enemigos que vulneraba su dignidad y su moral y de paso gratificaba las necesidades sexuales de los vencedores, por tanto carecía completamente de sanción. Este lado oscuro y miserable del conflicto no alcanzaba a empañar las victorias porque había pocas voces dispuestas a reconocer su existencia y a calificarlo como un crimen. Con dificultades, estas denuncias han ido creciendo, mostrando la gravedad de los hechos y sus consecuencias. La violación y otras formas de violencia sexual están prohibidas por el derecho internacional humanitario, específicamente por los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977, de los que Chile es signatario. Estos contienen 19 disposiciones específicas relativas a la mujer, pero su alcance es limitado. En su conjunto, tienen como objetivo prestar una protección especial a las mujeres embarazadas, a las madres lactantes y a las madres en general, y presentar la cuestión de la vulnerabilidad de las mujeres ante la violencia sexual en tiempo de conflicto armado. Agrega que la violencia sexual constituye una de las formas más graves de vulneración personal y que sus secuelas son permanentes. En 1998, la Corte Penal Internacional reconoció en uno de sus estatutos legales vinculantes, que la violación sexual podría constituirse en un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad, en vez de considerarlo un simple crimen contra la dignidad de las personas, como tradicionalmente se ha establecido en el derecho internacional humanitario.

Continúa indicando que, en ese contexto de acuerdo a la Comisión Valech, la violación es un ataque contra la dignidad personal y constituye una tortura cuando: Es infligida, instigada o llevada a cabo con el consentimiento o la pasividad de un funcionario público u otra persona que actúa como



representante oficial; Busca infligir dolores o sufrimientos para intimidar a la víctima, obtener información, denigrarla o castigarla por actos reales o supuestos atribuidos a ella o a miembros de su familia o para proporcionar satisfacción al victimario bajo condiciones de abuso y desprotección absoluta de la víctima. La violación es una experiencia traumática que afecta principalmente a la vida sexual. Tiene, además, consecuencias emocionales y físicas inmediatas por un eventual embarazo o incluso por una enfermedad sexual. El efecto devastador de la violación se agrava cuando es realizada por varios individuos en forma sucesiva. No se trata solamente de la agonía física sufrida, sino también del desamparo ante la agresión y del hecho que las otras personas no solamente son indiferentes a lo que le ocurre a la víctima, sino que participan activamente en la agresión. La tortura, en todos los casos, destruye la confianza en los otros seres humanos, pero en el caso de la tortura sexual bajo estas circunstancias, incide sobre las relaciones afectivas más íntimas y cercanas tanto de la propia sexualidad como de la maternidad.

Se refiere a **situaciones conocidas por la Comisión** indicando que las entrevistas realizadas por esta Comisión no indagaron expresamente acerca de la violencia sexual ejercida contra las ex presas. Las situaciones que se registran fueron mencionadas espontáneamente por las declarantes. Es necesario señalar que la violación sexual es para muchas mujeres un hecho del cual les cuesta hablar y muchas veces prefieren no hacerlo. La violencia sexual contra las mujeres durante el régimen militar constituye una de las formas más brutales de violencia, sin embargo es preciso subrayar que las mujeres fueron detenidas por sus ideas, sus acciones y participación política, no por su condición de tales. Sin embargo, la violencia ejercida sobre ellas utiliza su condición sexual, agravando el impacto sobre su integridad moral y psicológica.

Enseguida, se expone sobre **la responsabilidad del Estado analizada desde la Constitución Política de la República**, indicando que el artículo 38, inciso 2º, de la Constitución Política de la República señala que cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por el Estado podrá reclamar ante los tribunales de justicia, precepto que consagra una verdadera acción constitucional para hacer efectiva la responsabilidad de los organismos del Estado, cuando estos por su actividad provoquen un daño a una persona, ya sea natural o jurídica. Menciona jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y señala que el fundamento básico de esa responsabilidad legal o extracontractual del Estado está contenido en diversas disposiciones de rango constitucional, supra constitucional y también legal, y todas ellas -cuando menos- son normas propias del ámbito del Derecho público.

Se remite al Capítulo I de la Constitución Política de la República sobre las Bases de la Institucionalidad para delimitar la responsabilidad del Estado por los hechos que sustentan el libelo, en donde el constituyente desarrolla los principios basales desde donde se estructura todo el sistema institucional y saca a luz lo prescrito en los artículos 1, 5, 6 y 7 de la Carta Fundamental, disposiciones que a su vez establecen los principios de la primacía constitucional y de juridicidad, respectivamente, conforman el denominado estatuto de la responsabilidad extracontractual del Estado. Responsabilidad que asevera emana de la naturaleza misma del ente estatal



como persona jurídica compleja creada para la realización del bien común, así como de cumplir los compromisos que emanan de los tratados internacionales ratificados por Chile, así como por el Derecho internacional imperativo.

Hace presente en cuanto a **la responsabilidad del Estado a la luz del Derecho Internacional** que el conjunto de normas y principios referidos no han hecho sino reconocer aquello que a nivel internacional se ha venido desarrollando por más de un siglo. En efecto, concepciones tales como bien común, la superioridad ontológica de la persona frente al Estado o la dignidad humana como límite a la soberanía estatal, formaban ya parte integrante del *corpus iuris* internacional conformado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el cual obliga y es fuente de responsabilidad para el Estado de Chile. El Estado de Chile mediante la suscripción de declaraciones y convenciones a nivel internacional, así como concurriendo con su voto en la aprobación de múltiples resoluciones por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, o bien mediante la vigencia de la costumbre internacional y los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas (artículo 38 Estatuto de la Corte Internacional de Justicia), así como reconociendo el Derecho internacional imperativo o *ius cogens* ha ido adquiriendo de forma progresiva una serie de obligaciones que responden al deber general de “respeto de los derechos esenciales del hombre” por parte de los Estados. Tal obligación se desprende del preámbulo y, entre otros, de los artículos 3.K, 16, 17, 32, 44, 45, 46 y 136 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en concordancia con los preceptos de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sostiene que en concreto, en materia de derechos humanos los Estados tienen una obligación de resultado, cual es, la efectiva vigencia de los derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales y de allí, la responsabilidad del Estado por violación a los derechos humanos es una cuestión objetiva, toda vez que el ilícito por violaciones a los derechos fundamentales se produce en el momento en que el Estado actúa en violación de una norma obligatoria, sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del agente, tratándose en consecuencia de una responsabilidad objetiva en donde no interesa la presencia de dolo o culpa en el accionar dañoso del Estado. La responsabilidad internacional del Estado nace al momento en que con su actuar se infringe los límites que le señalan los derechos humanos como atributos inherentes a la dignidad de las personas, sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del autor material del acto, confirmando normativamente esa interpretación el encabezado del artículo 19 de la Constitución Política de la República que establece los derechos y deberes constitucionales al señalar de modo categórico que: “La Constitución asegura a todas las personas [...]”. Así, la Constitución reconoce y asegura la vigencia de los derechos humanos, obligándose ante la comunidad internacional a su efectiva vigencia a través del artículo 5º, inciso 2º, que incorpora toda la normativa internacional aplicable en la especie y en el mismo sentido lo hace el



artículo 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por último, el artículo 19, Nº 20 de la Carta Fundamental.

Comenta sobre **la improcedencia de aplicar las normas y principios del derecho privado a los casos de responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad**, indicando que ha quedado de manifiesto que la correcta resolución del caso *sub lite* requiere la aplicación armónica de la Constitución Política, de los tratados internacionales sobre derechos humanos y de la Ley de Bases de la Administración del Estado, resultando en el conflicto improcedentes las reglas propias del derecho de daños contenidas en el Código Civil, toda vez que dicho estatuto construye sobre premisas y principios diferentes a los del derecho público y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, constituyendo un error de lógica y sistemática jurídica la aplicación de normas de derecho privado a las situaciones en que se persigue la responsabilidad del Estado por actos dañosos, ya que ambos difieren en su naturaleza y fines, destinado a otras conductas e intereses. Repasa al respecto los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados referidos a la obligación de cumplir los convenios, y a la imposibilidad de invocar reglas de derecho interno para incumplir un tratado. Sigue exponiendo un conjunto de razones de texto que lo llevan a sostener por qué el derecho de daños del Código Civil chileno es insuficiente para resolver conflictos que versan sobre violaciones a los derechos fundamentales de la persona humana.

Se extiende sobre **la imprescriptibilidad de las acciones judiciales en casos de responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad**, afirmando que la materia que trata la presente causa quede gobernada bajo normas de carácter público e internacional -por sobre las meramente privadas- implica reconocer la autonomía y orgánica particularidad del complejo normativo de los derechos humanos, de modo tal que no solo cabe afirmar el carácter objetivo de la responsabilidad del Estado sino además la imprescriptibilidad de las acciones patrimoniales derivadas de graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Refiere que la Convención Americana –tratado internacional ratificado por Chile y actualmente vigente en su territorio por la vía del artículo 5º inciso 2º, de la Constitución Política- señala con claridad la existencia del deber de reparar que se le impone a todo Estado que haya sido responsable de violar alguno de los derechos fundamentales de la persona humana que se encuentren garantizados por dicha Convención. Señala que, resulta imposible abstraerse del hecho de que toda violación a un derecho humano al interior del sistema interamericano (del cual, Chile, por cierto, es parte) trae aparejada la obligación de reparar el mal causado, siendo en esa materia la norma rectora la del artículo 63 del Pacto de San José y por lo tanto, en Chile –dada su calidad de Estado miembro del sistema interamericano- la lógica que debiera operar en casos de violaciones de derecho humanos de alguna persona tendría que ser la misma: reparar íntegramente el mal causado. Obligación ésta del Estado que queda sujeta al constructo normativo de los derechos humanos y a sus principios formativos, a saber: el principio *pro homine*, el principio de progresividad de sus normas abiertas a una evolución conceptual y el principio de la congruencia de



aquellas, entre otros. Realiza una somera revisión de la extensa reglamentación internacional sobre la materia.

Prosigue citando **jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema sobre casos de responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad**, indicando sendos fallos en que el Máximo Tribunal de Justicia ha declarado la imprescriptibilidad de la acción civil cuando éste emana de un crimen de lesa humanidad, y también han desechado las excepciones de pago y de preterición legal hechas valer por el Estado de Chile como argumentos para no indemnizar a los familiares de las víctimas, agregando que en el caso sub lite la reparación pasaría por el hecho que la judicatura interna acogiese la acción civil incoada con ese propósito, desechando las excepciones que históricamente han sido echas valer por el Fisco, a saber, la excepción de pago, de prescripción, de preterición, entre otras, siendo esta la única conclusión a la que se puede arribar si se considera que los hechos que dan vida a esta demanda son, precisamente, crímenes cometidos por agentes del Estado de Chile en contra de la parte demandante. Analiza jurisprudencia al efecto.

Enseguida, se refiere a lo **que ha fallado la Excma. Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la aplicación, por los tribunales chilenos, de la institución de la prescripción, respecto de las acciones civiles impetradas por víctimas de violaciones a los derechos humanos**, haciendo mención a que existen en la actualidad varias denuncias ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos por el rechazo de demandas civiles impetradas por víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar que azotó al país entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, por incumplimiento al deber que le corresponde al Estado de reparar a dichas víctimas, ya que los tribunales chilenos consideraron, en la época en que estas demandas fueron presentadas, que dichas acciones estaban prescritas (sabemos igualmente, estimando importante mencionar que ese criterio cambió, analizando al efecto la causa “María Laura Órdenes Guerra y otros vs Chile”, caso Nº 12.521, cuya tramitación es la que se encuentra más avanzada, y respecto de la cual la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió el informe de fondo Nº 52/16, cuya conclusión reproduce y agrega que la citada causa ya tiene fallo mediante el cual se acepta el reconocimiento de responsabilidad realizado por el Estado, y se determina que *“El Estado es responsable por la violación del derecho de acceso a la justicia, en los términos de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma...”*, determinando que se debe pagar a cada uno de los peticionarios una suma de dinero, entre otras cosas.

Señala que lo antes expuesto establece un precedente más en cuanto a la imposibilidad de aplicar la prescripción de la acción civil en estos casos. No solamente lo han establecido los Tribunales Superiores de Justicia nacionales, sino además la justicia internacional a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Finalizando y bajo la denominación **“El Daño Provocado Y El Monto De La Indemnización”**, sostiene que, en el caso de marras existe un daño de



carácter moral que se expresa en dolor, sufrimiento, angustia, sensación de pérdida, rabia e impotencia ante la situación extremadamente violenta, injusta e ilegítima que vivió en carne propia el demandante, lo que es indudablemente un daño moral, el cual, según la dogmática jurídica y la jurisprudencia nacional e internacional, amerita ser reparado a través de una indemnización. Entiende por daño moral aquella específica clase de menoscabo que afecta a los atributos y facultades morales o espirituales de una persona, esto es un dolor, un pesar, una angustia, molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos a consecuencia del hecho ilícito y, en general, toda clase de sufrimiento moral o físico. Cita doctrina chilena sobre la materia y comenta sobre jurisprudencia nacional e internacional al efecto, agregando que en el caso de los actores de autos se pide se condene al Fisco de Chile al pago de una suma total de \$600.000.000.- (seiscientos millones de pesos), divididos en \$150.000.000.- (ciento cincuenta millones de pesos) para cada uno de los demandantes, a saber, (1) don Nelson Ricardo Viveros Lagos; (2) Doña Silvia Gioconda Pavez Rivera; (3) Don Jaime Andrés Malagueño Hormazabal; Y (4) Don Luis Alberto Ramírez Martínez, a título de indemnización por el daño moral que se le ha causado como consecuencia directa de los crímenes cometidos en contra de su persona, en manos de agentes del Estado de Chile, o bien, lo que esta judicatura determine en justicia, cantidad que indica deberá ser reajustada de acuerdo a la variación del IPC, desde la fecha de interposición de esta demanda y el pago efectivo de la indemnización que en definitiva se establezca, junto con los intereses legales correspondientes durante el mismo período y las costas de la causa. Aclara que la cifra propuesta no es producto de la improvisación, ni menos de un capricho o arbitrariedad sino que se ajusta a la jurisprudencia de los máximos tribunales considerando la afectación sufrida.

SEGUNDO.- Que, consta que se tuvo por evacuada la **contestación de la demanda** en rebeldía de la parte demandada.

TERCERO.- Que, consta que se tuvo por evacuado el trámite de **réplica** en rebeldía de la demandante.

CUARTO.- Que, evacuando el trámite de **dúplica** la demandada opone alegaciones, excepciones y defensas a la demanda, solicitando el rechazo de las acciones deducidas en todas sus partes. Sintetizando la demanda indica que, comparece el abogado don Nelson Caucoto Pereira en representación consensual según mandato judicial de los señores Nelson Ricardo Viveros Lagos, Silvia Gioconda Pavez Rivera, Jaime Andrés Malagueño Hormazabal y Luis Alberto Ramírez Martínez y deduce demanda de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido por los actores por la prisión política y tortura de que habrían sido víctimas, solicitando la suma de \$ 600.000.000.- para todos ellos, en razón de \$ 150.000.000.- para cada demandante, más reajustes e intereses desde la fecha de interposición de la demanda, con costas. Agrega que todos los actores, fueron reconocidos como víctimas de prisión política y tortura en el Informe Valech. Expresa en su demanda que sus representados fueron detenidos por agentes del Estado, en las circunstancias que se expresan respecto de cada uno de ellos. Invoca como fundamento jurídico de su acción dirigida en contra del Fisco de Chile, diversas disposiciones de la Constitución Política de 1980; la ley 18.575 sobre Bases de



la Administración del Estado, la Convención Americana de Derechos Humanos; y, general, las disposiciones del complejo normativo denominado “Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, y una recopilación de fallos sobre la materia, todo lo cual configuraría a su entender, una responsabilidad extracontractual imprescriptible del Estado.

En primer lugar, opone a la demanda la **excepción de cosa juzgada**, respecto del actor don **Jaime Andrés Malagueño Hormazábal**, cédula nacional de identidad N° 4.945.948-3, por existir sentencia definitiva ejecutoriada en la materia, habiendo este ya ejercido una acción por los mismos hechos, habiéndose dictado sentencia ejecutoriada que declaró respecto del demandante Jaime Andrés Malagueño Hormazábal, que demandó de indemnización de perjuicios al Fisco de Chile en la causa “Salgado y otros con Fisco de Chile”, de la cual conoció el 14° Juzgado Civil de Santiago; bajo el Rol: C-1890-2006, por los apremios ilegítimos que sufrió, dictándose en esos autos, sentencia definitiva que acogió la prescripción de la acción indemnizatoria, confirmada por la ltma. Corte de Apelaciones de Santiago y rechazada la casación en el fondo deducida en su contra, encontrándose firme y ejecutoriada. Todo ello se acredita en el proceso con las respectivas sentencias en que consta el ejercicio de la misma acción las cuales solicita se traigan a la vista, sin perjuicio de acompañarse también como documentos, concurriendo los requisitos que hace procedente la excepción de la cosa juzgada.

Funda la excepción señalando que el actor don Jaime Andrés Malagueño Hormazábal, deduce demanda civil de indemnización de perjuicios por daño moral en contra del Fisco de Chile, por la supuesta responsabilidad extracontractual imprescriptible de éste por haber sido víctimas de prisión política y tortura causadas por agentes del Estado, sin embargo, ese actor dedujo, junto a otros actores, demanda civil en contra del Fisco de Chile seguida ante el 14° Juzgado Civil de Santiago, bajo el rol C-1890-2006, caratulada “Salgado Y Otros Con Fisco De Chile”, sobre indemnización de perjuicios por daño moral, apreciándose de los hechos expuestos en dicho libelo, que concurren las mismas partes, causa de pedir y objeto pedido, ya que don Jaime Andrés Malagueño Hormazábal demandó al Fisco de Chile por la supuesta responsabilidad extracontractual de éste por los torturas y apremios ilegítimos de los cuales fue víctima. Aquella demanda de indemnización de perjuicios fue rechazada por sentencia de primer grado, de fecha 5 de julio de 2011, al ser acogida la excepción de prescripción del artículo 2332 del Código Civil opuesta por el Fisco. Dicha sentencia fue confirmada por la ltma. Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el Ingreso N°7649-2011, con fecha 10 de enero de 2014, luego de rechazar el recurso de apelación. La Excm. Corte Suprema, por sentencia de 19 de noviembre de 2014, y bajo el Ingreso CS N°7.888-2014, rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto por dicho demandante.

Funda la citada excepción de cosa juzgada en lo prescrito en el artículo 1567 N° 3 del Código Civil, que indica que la cosa juzgada es un modo de extinguir las obligaciones. Cita de igual manera los artículos 175 y 177 del Código de Procedimiento Civil, que transcribe al efecto, asegurando que se da la triple identidad requerida en cuanto hay identidad legal de personas, pues es



el actor individualizado demandante civil en el proceso; siendo además el Fisco de Chile el demandado en dichos juicios, por lo cual coinciden tanto la identidad física como legal-procesal de ambas partes; en cuanto a la identidad legal de cosa pedida: siendo la indemnización por daño moral por responsabilidad civil extracontractual objetiva e imprescriptible del Fisco de Chile, lo demandado en ambos procesos; y en cuanto la causa de pedir es el mismo delito por los apremios ilegítimos o torturas que habría sufrido en manos de agentes del Estado.

En **segundo lugar, y en subsidio** a la excepción de cosa juzgada, opone a la acción deducida, la **excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizados todos los actores** de estos autos, refiriéndose al **marco general sobre las reparaciones otorgadas** indicando que, no resulta posible comprender el régimen jurídico de las reparaciones por infracciones a los Derechos Humanos si no se posicionan correctamente estas indemnizaciones en el panorama jurídico nacional e internacional, debiéndose considerar el ámbito de la llamada “*Justicia Transicional*”. Indica que, en efecto, el denominado dilema “justicia versus paz” es, sin lugar a duda, uno de los pilares sobre los cuales descansa el edificio de aquella justicia transicional¹. Argumentos en favor de amnistías generales que porten la necesaria tranquilidad a un país, deben lidiar con la imperiosa necesidad de que una sociedad se mire a sí misma y reconozca los errores del pasado para así pronunciar aquel imperioso “nunca más” y en esta perspectiva, las transiciones son, y han sido siempre, medidas de síntesis mediante las cuales determinadas sociedades, en específicos momentos históricos, definen las proporciones de sacrificio de los bienes en juego al interior de aquel profundo dilema. Indica que, por otro lado, no debe olvidarse que, desde la perspectiva de las víctimas, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada. Las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas, a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Este concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las comisiones de verdad o reconciliación proponen como programas de reparación. Estos programas, en efecto, incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero³.

Refiriéndose luego a la **complejidad reparatoria**, cita jurisprudencia de la autora Elizabeth Lira y respecto de los objetivos de la justicia transicional fueron: “(a) *el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura; (b) la provisión de reparaciones para los afectados; y (c) el favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse*”, añadiendo que la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, o también llamada Comisión Rettig, en su Informe Final propuso una serie de “*propuestas de reparación*” entre las cuales se encontraba una “*pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas*” y algunas prestaciones de salud y dicho informe sirvió de causa y



justificación al proyecto de ley que el Presidente de la República envió al Congreso y que luego derivaría en la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.

Refiere que, asumida la idea reparatoria, la Ley 19.123 y otras normas jurídicas conexas han establecido los diversos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación, exhibiendo aquella síntesis que explica cómo el país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional. Indica que en ese sentido, **la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado** principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber: a. Reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b. Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y c. Reparaciones simbólicas; las que buscan la reparación moral y patrimonial de las víctimas. Analiza luego, cada una de esas compensaciones y lo que éstas han cubierto, resaltando en cuanto a las reparaciones específicas que en lo tocante al caso de marras cabe señalar que los demandantes han recibido beneficios pecuniarios al amparo de la ley N.º 19.992 y sus modificaciones. En efecto, la ley 19.992 y sus modificaciones estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas.

Refiriéndose a lo que denomina como la **identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas**, indica que, tanto las indemnizaciones que se solicitan en estos autos como el cúmulo de reparaciones antes indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado aquellos daños, no procediendo, por ello, ser compensados nuevamente. Reproduce jurisprudencia en ese sentido y menciona que órganos internacionales de tanta importancia como la Corte Interamericana de Justicia han valorado positivamente la política de reparación de violaciones de Derechos Humanos desarrollada por Chile, a tal punto que han denegado otro tipo de reparación pecuniaria luego de tomar en consideración los montos ya pagados por el Estado por conceptos de pensiones, beneficios y prestaciones públicas y en ese mismo sentido, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha considerado los beneficios de establecer un sistema compensatorio único para todas las víctimas que no genere desigualdades. Concluye que, estando la acción interpuesta en autos basada en los mismos hechos y pretendiendo ella indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias, ya enunciadas, y al tenor de documentos oficiales que indica acompañar, es que opone la excepción comentada.

Enseguida y en subsidio, se refiere a la **excepción de prescripción extintiva**, expresando que en subsidio de la excepción de cosa juzgada, y además de la excepción de reparación alegada, opone la excepción de prescripción de las acciones de indemnización de perjuicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse prescritas, se rechace la demanda en todas sus partes, indicando que conforme al relato



efectuado por los actores, los hechos en que se fundan las acciones se produjeron entre el mes de abril de 1975 hasta final del año 1976, siendo del caso que, entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el **24 de enero de 2020**, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil. En consecuencia, opone la excepción de prescripción de 4 años establecida en el artículo 2332 del Código Civil, pidiendo que se acoja y se rechacen íntegramente la acción indemnizatoria deducida como consecuencia de ello, por encontrarse prescrita.

En subsidio, en caso que se estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de la acción civil que contesto, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil.

Se extiende **sobre generalidades de la prescripción**, indicando que por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles, por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe y pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves, absurdas y perturbadoras, repasando que la prescripción es una institución universal y de orden público, siendo efectivo que las normas del Título XLII del Código Civil, que la consagran y, en especial, las de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no sólo al derecho privado. Entre estas normas está el artículo 2.497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado, disposición que consagra, con carácter obligatorio, el principio de que, al igual que tratándose de las relaciones entre particulares (que es el sentido de la expresión “igualmente” que emplea el precepto) la prescripción afecta o favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público, a pesar de que éstas, como lo señala el artículo 547, inciso 2º, del Código Civil, se rijan por leyes y reglamentos especiales. Menciona que, la prescripción es una institución de aplicación general en todo el ámbito jurídico y de orden público, pues no cabe renunciarla anticipadamente (artículo 2.494, inciso 1º, del Código Civil). La responsabilidad que se atribuye al Estado y la que se reclama en contra de particulares tienen la misma finalidad: resarcir un perjuicio, reponiendo en el patrimonio dañado, el menoscabo que haya sufrido y como es sabido, toda acción patrimonial crediticia se extingue por prescripción, de conformidad con los artículos 2.514 y 2.515 del Código Civil.

Enseguida, refiriéndose a los **fundamentos de la prescripción** indica que, la prescripción tiene por fundamento dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta



equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida.

Analiza **jurisprudencia** sobre la materia, en particular la sentencia del pleno de la Excma. Corte Suprema de 21 de enero de 2013, sobre unificación de jurisprudencia de demandas de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile por hechos acaecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, como asimismo, reciente jurisprudencia de la I. Corte de Apelaciones de Concepción de fallo dictado por la Primera Sala de a I. Corte de Apelaciones de Concepción en causa Rol 1242- 2016, de fecha de 6 de abril de 2017, que acoge la excepción de prescripción extintiva opuesta por el Fisco de Chile y declara que se rechaza la demanda.

Indica respecto al **contenido patrimonial de la acción indemnizatoria** que, la indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de esta, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. Sobre el particular debe considerarse, como reiteradamente se ha planteado por la doctrina fiscal sustentada en sus diversas defensas y lo ha recogido la más nueva y reiterada jurisprudencia, que en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece -como se ha dicho- al ámbito patrimonial. En efecto, basta considerar que el derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos de disposición, tales como renuncia o transacción (incluso en casos de violaciones a los Derechos Humanos), por lo que no existe fundamento plausible para estimar que se trata de una acción ajena a la prescripción liberatoria que no es sino una suerte de renuncia tácita por el no ejercicio oportuno de la misma.

Argumentando acerca de las **normas contenidas en el Derecho Internacional**, indica que en cuanto a que el demandante alega imprescriptibilidad de la acción para obtener la reparación por los daños reclamados conforme al derecho internacional de los derechos humanos, en este sentido, se hace cargo en particular de ciertos instrumentos internacionales, aunque no todos ellos aparecen citados en la demanda, adelantando desde ya que ninguno contempla la imprescriptibilidad de la acción civil derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia, entre éstos, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, aprobada por Resolución N.º 2.391 de 26 de Noviembre de 1968, y en vigor desde el año 1970, los Convenios de Ginebra de 1949, ratificados por Chile en 1951, que se refieren exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias, tal como ha resuelto nuestro Máximo Tribunal, la Resolución N.º 3.074, de 3 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominada "*Principios de Cooperación Internacional para el descubrimiento,*



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JWCLXFRKPEX

el arresto, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes contra la humanidad", que se refiere exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias, la Convención Americana de Derechos Humanos, respecto de la que hemos de señalar que sin perjuicio que la aplicación de dicho Tratado no es atingente al caso *sub-lite* puesto que, en la época en que acontecieron los hechos, no estaba vigente, dado que su promulgación se produjo por Decreto Supremo N° 873, publicado en el Diario Oficial el 5 de enero de 1991; ninguna duda cabe que la citada normativa no establece la imprescriptibilidad en materia indemnizatoria. Sigue citando jurisprudencia al efecto de la Excm. Corte Suprema, la que ha desestimado la aplicación de esa normativa en diversos fallos, como lo ha establecido conociendo del recurso de casación interpuesto en los autos Ingreso N.º 1.133-06, caratulados "Neira Rivas, Gloria con Fisco de Chile", de 24 de julio de 2007 y causa "Martínez Rodríguez y otra con Fisco de Chile", autos ingreso N.º 4.067-2006, en fallo de fecha 29 de octubre de 2007, cuyos considerandos atinentes transcribe al efecto.

En síntesis sostiene que, no habiendo, en consecuencia, norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, el Tribunal no puede apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver la presente contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2.332 y 2.497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado, por lo que deberá rechazar la demanda indemnizatoria por encontrarse prescritas las acciones civiles deducidas.

Siguiendo, en **cuanto al daño e indemnización reclamada**, refiere que en **subsidio de las defensas y excepciones precedentes**, formula las siguientes alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y al excesivo monto pretendido de \$600.000.000.- (seiscientos millones de pesos). Indica sobre la **fijación de la indemnización por daño moral**, haciendo presente, con relación al daño moral que no puede dejar de considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades inmateriales, lo que dependerá, de las secuelas sufridas con motivo de los hechos señalados en el libelo y de conformidad a los antecedentes que obren en autos en la etapa probatoria del mismo. Así, entonces, los llamados daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente. Ello produce a su respecto una imposibilidad latente e insuperable de evaluación y apreciación pecuniaria. En términos generales, la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso. Por ende, la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando



a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva. Reproduce lo sostenido por la Excma. Corte Suprema en ese sentido y añade que hay que regular el monto de la indemnización que debe ser un procedimiento destinado a atenuar los efectos o el rigor de la pérdida extrapatrimonial sufrida. Por otra parte, es dable advertir que tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, pues, como se ha dicho, el juez sólo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencia estas capacidades.

Refiere que no habiendo norma legal que establezca una excepción relativa a la capacidad económica habrá de estarse al principio general y básico de la cuantificación conforme a la extensión del daño, ni más ni menos, con absoluta prescindencia del patrimonio del obligado al pago. En tal sentido, las idénticas cifras pretendidas en la demanda como compensación del daño moral, resultan excesivas teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por nuestros tribunales de justicia, que en esta materia han actuado con mucha prudencia. Invoca jurisprudencia en ese sentido.

Luego, **en subsidio** de las excepciones precedentes precedentes, la **regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales**, menciona que, en efecto, en subsidio de las excepciones de cosa juzgada, reparación integral y prescripción extintiva de las acciones deducidas, alega en todo caso que en la fijación del daño moral por los hechos de autos, el tribunal debe considerar todos los pagos recibidos a través de los años por los actores de parte del Estado, conforme a las leyes de reparación (19.234, 19.992, sus modificaciones y demás normativa pertinente), y que seguirán percibiendo a título de pensión, y también los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tienen por objeto reparar el daño moral y de no accederse a esa petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Estima pertinente hacer presente que, para la adecuada regulación y fijación del daño moral deben considerarse como un parámetro válido los montos establecidos en las sentencias de los tribunales en esta materia, lo que implica rebajar sustancialmente los montos pecuniarios demandados.

Finalizando argumenta acerca de **la improcedencia del pago de reajustes e intereses en la forma solicitada**, haciendo mención a que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación, y además desde que dicha sentencia se encuentre firme o ejecutoriada. A la fecha de interposición de la demanda de autos a tramitación, o de su notificación, y mientras no exista sentencia firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene el demandado de indemnizar, y por tanto no existe ninguna suma que deba reajustarse, lo que implica que, en casos como el de autos, los reajustes que



procedieren de ninguna manera podrían contabilizarse desde una fecha anterior a aquella en que la sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada.

Señala que el reajuste es un mecanismo económico-financiero que tiene por objeto neutralizar el efecto que los procesos inflacionarios o deflacionarios tienen sobre la moneda de curso legal. Desde esta perspectiva, no procede aplicar la corrección monetaria a partir de una fecha anterior a la determinación del monto respectivo por sentencia ejecutoriada.

Respecto de los intereses, el artículo 1551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia, indicando que la jurisprudencia de los tribunales superiores así lo han decidido de manera uniforme, por consiguiente, en el hipotético caso de que se decida acoger la demanda de autos y se condene al demandado al pago de una indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y mi representado incurra en mora.

QUINTO.- Que, recibida la causa a prueba, consta al efecto que la **demandante** ha aparejado en autos por el primer otrosí de su libelo de folio 1 y presentaciones de folios 6 y 41, **prueba documental** parte de la cual se guarda en custodia del tribunal bajo N° 10.508-2019, consistente en:

1.- Certificados emitidos por la Unidad de Colaboración a la Ciudadanía del Instituto Nacional de Derechos Humanos, todos de fecha 10 de enero de 2018, que consigna que don Nelson Ricardo Viveros Lagos, doña Silvia Gioconda Pavez Rivera, Jaime Andrés Malagueño Hormazábal y don Luis Alberto Ramírez Martínez, se encuentran calificados como víctimas en el Listado de Prisión Política y Tortura, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech I, registrados bajos los números 26.642, 18.448, 13.738 y 19.942, respectivamente, de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas. Se adjuntan las páginas 641, 449, 339 y 484, de la referida Nómina.

2.- Copias autorizadas de escrituras públicas de fecha 10 de enero de 2018, 11 de enero de 2018, 12 de enero de 2018, otorgadas todas ante notario público doña María Soledad Santos Muñoz, Titular de la Séptima Notaría de Santiago, y anotadas en Repertorios N° 363-2018, 512-2018, 625-2018 y 510-2018, donde consta mandatos judiciales conferidos por don Nelson Ricardo Viveros Lagos, doña Silvia Gioconda Pavez Rivera, don Jaime Andrés Malagueño Hormazábal y don Luis Alberto Ramírez Martínez, respectivamente, a don Nelson Guillermo Caucoto Pereira.

3.- Copia de Informe de Atención Psicológica de fecha 24 de junio de 2019, de don Nelson Ricardo Viveros Lagos, suscrito por don José Latorre Salas, Psicólogo del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS), del CRS Dr. Salvador Allende Gossens, del Servicio de Salud Metropolitano del Ministerio de Salud.

4.- Copia de Informe Psicológico con Énfasis en Evaluación de Daño de doña Silvia Gioconda Pavez Rivera, de septiembre de 2019, suscrito por don Juan Manuel Gálvez Villarreal, Psicólogo del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS) y por doña Carolina Rojas



Stapel, Coordinadora (s) del PRAIS del Servicio de Salud Metropolitano Norte del Ministerio de Salud.

5.- Copia de Informe Psicológico Efectos de la Prisión Política y Tortura de don Jaime Andrés Malagueño Hormazábal, de febrero de 2019, suscrito por doña Natalia Hidalgo Leiva, Psicóloga Clínica del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS), del Servicio de Salud Metropolitano Oriente del Ministerio de Salud.

6.- Copia de Informe Psicológico con Énfasis en Evaluación de Daño de don Luis Ramírez Martínez, de septiembre de 2019, suscrito por don Juan Manuel Gálvez Villarreal, Psicólogo del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS) y por doña Carolina Rojas Stapel, Coordinadora (s) del PRAIS, del Servicio de Salud Metropolitano Norte del Ministerio de Salud.

7.- Imagen digitalizada de sentencia de casación y de reemplazo de fechas 06 de diciembre de 2019, caratulado "Torres con Fisco", dictada en causa Rol 18.179-2019.

8.- Imagen digitalizada de sentencia de casación y de reemplazo de fechas 24 de diciembre de 2021, por el homicidio de don Augusto Cepeda Venegas, dictada en causa Rol 13.877-2019.

9.- Imagen digitalizada de sentencia de casación de 14 de junio de 2022 y sentencia de reemplazo de 24 de diciembre de 2021, Caso Paine, Episodio Principal, dictada en causa Rol 149.250.

10.- Imagen digitalizada de copia de Norma Técnica N° 88, para la Atención en Salud de Personas afectadas por la represión política ejercida por el Estado en el período 1973-1990, elaborado por la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud, de fecha 30 de junio de 2006.

11.- Imagen digitalizada de sentencia de 29 de noviembre de 2018, en caso Ordenes Guerra y otros vs Chile, dictada por la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

12.- Imagen digitalizada de escrito de contestación del Estado de Chile en el Caso Órdenes Guerra, Rol CDH-2-2017/038, en el mes de febrero 2018.

SEXTO.- Que, sin perjuicio de lo anterior la **demandante** rindió **prueba testimonial**, compareciendo ante estrados los siguientes testigos quienes debidamente individualizados y legalmente juramentados según consta del acta de folio 51, depusieron al tenor de la interlocutoria de prueba, expresando lo siguiente: **1.- Doña Ana Zunilda López López**, a los puntos de prueba, **N° 1**, indica conocer a Nelson Viveros Lagos desde el año 1970, como profesores se conocieron en el sindicato de ese tiempo en la parte gremial; **N°2.** Nelson para la época de los hechos estaba por casarse. Su pareja y familia sufrieron mucho al no saber de su destino luego de su detención. Sufrieron también problemas económicos al no estar Nelson trabajando, tuvieron que ayudar a su señora y por eso la conoció. Eso fue en el año 1976. Le consta porque Nelson trabajaba en la Escuela Consolidada Dávila. El daño moral lo es por la detención repentina de Nelson, por haber sido sacado de su lugar de trabajo, por haber perdido su fuente laboral, no tener recursos económicos y el daño por haberse alejado de su señora e hija. **Repreguntada** aclara los efectos que tuvo la detención de Nelson en la familia reiterando que fueron dañados, sufrieron su señora y familia, sufrieron daño económico,



pérdida laboral. **2.- Pedro Alejandro Matta Lemoine**, a los puntos de prueba **Nº1**, indica conocer a Nelson Vivero y a Jaime Malagueño desde mediados y fines de mayo de 1975, periodo en el que coincidieron en el centro de torturas Villa Grimaldi y posteriormente en el pabellón de incomunicados en el centro de Cuatro Álamos. **Aclarando** acerca si las dificultades que sufrió don Nelson Viveros perduran hasta la fecha, responde no saberlo porque no lo ha visto frecuentemente, no lo ha observado caminar. Agrega que de las golpizas que recibió se fue recuperando paulatinamente durante el tiempo que permaneció detenido en Ritoque y Puchuncaví. Luego siguió su recuperación en New York, ciudad desde la cual dejó de verlo en el año 1978, año en que se mudó de ciudad. Ahondando en las manifestaciones de los procesos depresivos de Viveros y Malagueño, refiere, a modo general, como afectó al conjunto de prisioneros entre los que se encuentran Viveros, Malagueña y él mismo, saliendo del periodo de tortura y de desaparición. Indica que los prisioneros llegaban a un estado de libre plática que se daba en los campos de detención de la época, sin embargo, al estar en el campo de detención en la época no era un tiempo de tranquilidad, no sabían cuánto tiempo iban a estar aislados de su familia y amigos, incluso con la posibilidad de ser forzados al exilio, por lo que es una situación de extrema inestabilidad, quiebre emocional, incertidumbre e incluso la eventualidad que se dio en algunos casos de ser sacados de los campos de detención para ser devueltos a los sitios de torturas para nuevos interrogatorios. **Aclarando** acerca si el daño sufrido por el exilio perdura hasta la fecha en Nelson Viveros y Jaime Malagueño, señala que si, que es el caso en general de todos los prisioneros políticos que sufrieron un quiebre emocional en sus vidas, ellos eran profesores por lo que su vida profesional sufrió un quiebre que no pudieron recuperar. Saliendo del periodo de desaparición que correspondía a centros de torturas y pabellón de incomunicados estuvo también con Viveros y Malagueño en el campo de detención de Ritoque y de Puchuncaví. En el año 1976, salió al exilio y nuevamente se encuentra con Nelson Ricardo en la ciudad de New York y con Jaime Malagueño, con éste último no recuerda en qué ciudad de Estados Unidos. Regresó a Chile en el año 1991, después del término de la dictadura y ocasionalmente se ha encontrado con los demandantes referidos; **Nº2**, para todos los prisioneros políticos el paso por los centros de tortura y particularmente por Villa Grimaldi es una experiencia que los ha marcado para resto de la vida, ya que fuera de las torturas habituales, vale decir, aplicación de electricidad en diferentes posiciones y con distintos métodos, en el caso de Nelson Viveros recuerda que sufrió varias brutales golpizas que le dificultaban caminar. Cuando se encontraban en el pabellón de incomunicados de Cuatro Álamos hubo una paulatina recuperación, pero lenta y luego continuó en los campos de detención de Ritoque y Puchuncaví. Señala que el exilio es otro golpe que les quiebra la vida, más aún al llegar a Estados Unidos, una sociedad distinta desde el punto de vista cultural e idioma, lo que implica periodos de adecuación a una sociedad totalmente distinta, procesos de bajas de ánimo y energía y también la necesidad de sobreponerse a toda costa ya que en el caso de Viveros y Malagueño tenían que sostener a sus familias y no quedarse en los procesos de desánimo. Tales procesos son lo que observó en Viveros y Malagueño. Respecto de Malagueño no recuerda las torturas que



éste padeció en Villa Grimaldi, pero que cierto es que fueron brutales como el resto de los detenidos, pero si mantiene en su recuerdo un hecho que en la dinámica de la época era insólito ya que las torturas se aplicaban en los centros de torturas y luego eran trasladados al recinto de incomunicados de Cuatro Álamos donde permanecían esperando la resolución que tomaría la DINA sobre sus vidas, siendo en ese contexto, generalmente o prácticamente nunca existían torturas en Cuatro Álamos, sin embargo, en el caso de Malagueño sí es torturado en Cuatro Álamos, es amarrado a una silla y se le aplica electricidad, lo que para el resto de los prisioneros además de ser una experiencia macabra era insólita en ese recinto. Malagueño también al llegar al exilio sufre los mismos procesos depresivos sufridos antes comentados, proceso que debió de sobrellevar para sostener a la familia.

SEPTIMO.- Que, por su parte el **demandado** de autos aparejó por el tercer y cuarto otrosí del escrito de dúplica de folio 20 y por presentaciones de folios 34, 35 y 42, prueba **documental** consistente en:

- 1.- Imagen digitalizada de demanda deducida en causa rol C-1890-2006, del 14º Juzgado Civil de Santiago.
- 2.- Imagen digitalizada de sentencia dictada en causa rol C-1890-2006, del 14º Juzgado Civil de Santiago.
- 3.- Imagen digitalizada de sentencia complementaria dictada por el mismo Tribunal, con fecha 28 de agosto de 2013.
- 4.- Imagen digitalizada de sentencia de segunda instancia dictada por la Tercera Sala de la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 10 de enero de 2014, rol de ingreso Nº Civil-7649-2011.
- 5.- Imagen digitalizada de sentencia dictada por la Tercera Sala de la Excma. Corte Suprema, con fecha 19 de noviembre de 2014, en ingreso rol Nº 7888-2014, que rechaza el recurso de casación en el fondo deducido por los demandantes, quedando firme y ejecutoriada la sentencia de segunda instancia que, confirmando la de primera, acogió la excepción de prescripción deducida por esta parte, por lo que rechazó la demanda de indemnización de perjuicios en todas sus partes.
- 6.- Certificado de fecha 11 de febrero de 2021, emanado del Secretario Abogado del Consejo de Defensa del Estado don Keny Miranda Ocampo, que consigna que doña Carolina Vásquez Rojas, ha sido nombrada para subrogar a la Abogada Procurador Fiscal de Santiago, en ausencia o impedimento de este.
- 7.- Copia autorizada de Resolución TRA 45/142/2017 de fecha 28 de agosto de 2017, publicada en el Diario Oficial con fecha 9 de septiembre de 2017 y en virtud de lo dispuesto en el artículo 24 del DFL Nº1 de Hacienda del año 1993, nombra a doña Ernestina Ruth Israel López, en el cargo de Abogada Procuradora Fiscal de Santiago como represento al Fisco de Chile en la presente causa, y que acompaño en este acto.
- 8.- Certificado de fecha 20 de julio de 2022, otorgado por la Secretaria Abogado (s) del Consejo de Defensa del Estado, doña Paulina Villagrán Vásquez, sobre designación de doña Carolina Vásquez Rojas, para subrogar a la Abogada Procuradora Fiscal de Santiago, en ausencia o impedimento de ésta, durante el período comprendido entre el 20 de julio al 10 de agosto del presente año.



OCTAVO.- Que, de igual modo **el demandado** Fisco de Chile, solicitó y obtuvo respuesta del Instituto de Previsión Social, que rola a folio 23, remitiendo Ord.DSGT N°4792-907, de fecha 22 de marzo de 2021, emitido por el Jefe de Depto. Secretaria General y Transparencia del Instituto de Previsión Social, el que detalla los beneficios de reparación Leyes 19.234, 19.992, 20.134 y 20.874, obtenidos por los demandantes don Nelson Ricardo Viveros Lagos, doña Silvia Gioconda Pavez Rivera, Jaime Andrés Malagueño y Luis Alberto Ramírez Martínez, en sus calidades de víctimas de Prisión Política y Torturas Ley Valech.

NOVENO.- Que, del mérito de autos, documentos individualizados en el motivo Quinto y testimoniales analizadas en el motivo Sexto del presente fallo y dentro del contexto político de público conocimiento acontecido a partir del 11 de septiembre de 1973, con el derrocamiento del gobierno constitucional del presidente Salvador Allende Gossens, tomando el poder un régimen *de facto* que se extendería por casi 17 años, caracterizado por una situación de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, violencia política, jurídica y social de la que fueron víctimas cientos de miles de personas en el país, se encuentra acreditado que “efectivamente don **Nelson Ricardo Viveros Lagos**, para la época de los hechos tenía 29 años de edad, padre y jefe de familia, era profesor de Estado, se desempeñaba como profesor jefe en la Escuela Consolidada de Experimentación de Santiago, dependiente del Ministerio de Educación, ubicado en el pasaje Quicaví, entre las calles Melinka por el sur y Petrohué por el norte, de la Población Miguel Dávila de la comuna de San Miguel, actualmente Pedro Aguirre Cerda. Desde el año 1967, fue militante del Partido Socialista y detentó cargos sociales como dirigente estudiantil de la Escuela Normal y posteriormente fue dirigente del magisterio, en el colegio indicado, de los profesores de los colegios experimentales y especiales (APEX), también dirigente nacional de la Unión de Profesores de Chile (profesores de Educación Básica), del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, SUTE, desde su creación en 1969 y de la CUT Provincial de Santiago. En el año 1973, asumió en el equipo del Partido Socialista integrando su Departamento Nacional Sindical. El día 27 de mayo de 1975, alrededor de las 9:30 horas, en circunstancias que se encontraba trabajando en el establecimiento educacional indicado, perdió su libertad tras ser detenido sin orden judicial ni causa legal alguna por dos militares de civil, quienes llegaron directamente hasta la sala de clases, y previo a haber sido subido a un vehículo le propinaron golpes de puño, le pusieron cinta adhesiva en sus ojos y unos lentes oscuros y amenazado de muerte fue conducido a un recinto correspondiente al centro secreto y clandestino de secuestro, tortura y exterminio a cargo de la Dirección de Inteligencia Nacional conocido como cuartel Terranova-Villa Grimaldi. En ese lugar, fue sometido a vejámenes, tratos crueles e inhumanos y degradantes, torturado en diversas ocasiones con golpizas de pies, manos y objetos contundentes y aplicación de descargas eléctricas en las partes más sensibles de su cuerpo: párpados, oídos, genitales, estómago, ano, jornadas que se prolongaron aún más cuando sus torturadores aseguraban que su identidad no era tal y que lo dejaron inconsciente y con pérdida de la orientación espacio/temporal. Por las lesiones padecidas por los torturados, sufrió fiebre por heridas infectadas siendo



trasladado por unos días a una clínica clandestina. Varios de sus días acontecieron en un pequeño habitáculo donde había una silla de madera, tirado de espaldas en el piso. Fue víctima de tormentos al escuchar gritos desgarradores de otras personas detenidas sometidos al mismo trato cruel, doloroso y degradante. De las agonías vividas fueron testigos otros detenidos en el lugar, entre ellos, los actores Jaime Malagueño y Luis Ramírez. Permaneció ilegal y arbitrariamente privado de libertad en el comentado recinto y también un periodo en el recinto de Cuatro Álamos, en el campo de concentración de Ritoque en la localidad de Quinteros, Región de Valparaíso y finalmente de Puchuncaví, por alrededor de dos meses, recuperando su libertad en el mes de junio del año 1976. Fue forzado a abandonar el país junto a su familia viviendo en Estados Unidos en calidad de exiliados políticos retornando a Chile en el año 1987. Por los hechos padecidos dio inicio a una querrela criminal ante Ministro en Visita Extraordinaria de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 1938-2019, *Villa Grimaldi, Silvia Mazzella y otros* (Desacumulada rol 1384-2018); doña **Silvia Gioconda Pavez Rivera**, casada, profesora de Estado en Historia, Geografía y Economía y de Inglés, para la época de los hechos, se desempeñaba como orientadora profesional. El día 26 de mayo de 1975, a eso de las 20:00 horas, fue secuestrada por agentes de la DINA, quienes irrumpieron en su casa ubicada en calle Segunda Transversal N° 6244, comuna de San Miguel, la subieron a un vehículo particular y en su interior le pusieron cinta adhesiva en sus ojos y encima una venda amarrada detrás de su cabeza. El auto tomo rumbo desconocido y en el trayecto recibió insultos vejatorios y amenazas, llegando finalmente al recinto que luego supo que se trataba de Villa Grimaldi, en donde fue objeto de un procedimiento de identificación con golpes e insultos y luego encerrada y aislada en una diminuta celda que solo le permitía permanecer de pie o en cuclillas. Mientras permaneció ilegal y arbitrariamente privada de libertad fue sujeta a tratos crueles, inhumanos y degradantes, víctima de vejaciones y sometida a tormentos como amenazas de muerte y amenazas de ser víctima de atentados sexuales. Escuchó como los torturadores le decían a su marido don Luis Ramírez Martínez, -también víctima y actor en autos-, quien se encontraba en otra sala, que volverían a violentarla si no hablaba y fue testigo de los flagelos aplicados en contra de éste. Fue sometida a reiteradas torturas consistentes en ser amarrada a una silla y recibir golpes, quemaduras con cigarros y aplicación de descargas eléctricas. Fue liberada en el mes de junio y al haber sido su marido expulsado del país lo acompañó al exilio el que duró más de 30 años regresando al país en el año 2005. Producto de los padecimientos físicos sufridos no logró tener hijos. Por los hechos narrados interpuso querrela criminal en causa Rol N° 1938-2019, *Villa Grimaldi, Episodio Silvia Mazzella y otros*; don **Jaime Andrés Malagueño Hormazábal**, para la fecha de los hechos, trabajaba como electromecánico de automóviles y estaba vinculado políticamente al Movimiento Izquierdo Revolucionario y mantenía estrecho lazo con Mario Maureira Vásquez, militante del MIR conocido como “Pato Malo” y muy buscado por la DINA en esos días, quien se encuentra en calidad de detenido desaparecido desde agosto de 1976 y hasta la fecha. A fines de 1974 o principios de 1975, Maureira fue contactado con otra persona que conoció con el pseudónimo de “Emilio”, el cual pasó a ser su superior en la



estructura política. Luego de unos fallidos intentos de puntos de contacto con un militante de nombre Juan Rojas Martínez, el día 11 de mayo de 1975, mientras caminaba hacia la calle Santa Rosa, fue interceptado por dos civiles quienes le apoyaron un arma en la cabeza y bajo amenazas fue obligado a caminar hacia un auto marca Fiat, modelo 125 estacionado entre otros vehículos, en donde se encontraban otros dos agentes, una mujer joven que apuntaba con un fusil AK 47 y otro hombre de mediana edad que actuaba como jefe, reconociendo a este último como agente de la DINA de nombre Tulio Pereira e identificando al secuestrador como Basclay Zapata Reyes. Le taparon los ojos con cinta adhesiva transparente y sobre eso unos lentes, le amarraron las muñecas por la espalda con una cuerda, fue golpeado y conducido al recinto de Villa Grimaldi, donde fue interrogado y golpeado por diferentes agentes y encerrado en las celdas denominadas casas Corvi, desde donde pudo identificar la voz de su punto de contacto de nombre Juan Rojas que estaba siendo interrogado en la habitación contigua. Al segundo día de cautiverio fue llevado a una zona donde se encontraba el método de tortura denominado la parrilla en donde fue duramente golpeado y le aplicaron electricidad en diferentes partes del cuerpo. También fue víctima de la práctica denominada “teléfono”, siendo golpeado con las palmas en los dos oídos simultáneamente. En días posteriores, siguió siendo interrogado y torturado reconociendo como sus torturados a conocidos agentes de la DINA de la época identificados como Tulio Pereira, Basclay Zapata, Marcelo Moren Brito. Fue testigo de la torturas de otros compañeros de secuestro a quienes colgaban de una viga, elevado, golpeado y mojado reiteradas veces, mientras esperaba su turno. También permaneció encerrado en las denominadas “casas Chile”. Posteriormente, fue trasladado a otros centros de detenciones clandestinos conocido como Cuatro Álamos, donde estuvo en muy malas condiciones físicas, con pérdida de equilibrio y desvanecimiento y luego al centro de Tres Álamos, donde permaneció alrededor de un mes. Fue llevado también a un campo de concentración en Ritoque y luego a Puchuncaví donde siguió en cautiverio hasta el fin del estado de sitio en noviembre de 1976. Una vez en libertad debió irse al exilio a Estados Unidos junto a su mujer que se extendió por unos 15 años hasta el año 1990; don **Luis Alberto Ramírez Martínez**, para la época de acontecido los hechos se encontraba titulado como profesor de Estado, participaba en actividades de índole gremial y se encontraba enfocado en su trabajo en su condición de profesor siendo dirigente del Sindicato Único de la Educación Provincial de Santiago, trabajaba en un colegio y estaba comprometido para contraer matrimonio con Silvia Guacolda Pavez Rivera. En el mes de marzo del año 1975, fue detenido por agentes del Estado quienes llegaron al colegio donde trabajaba y es sacado por medio de la fuerza y llevado a los centros de detenciones clandestinos denominados Villa Grimaldi, Tres Alamos y Puchuncaví. Permaneció privado de libertad por alrededor de un año. Durante su cautiverio, fue víctima en forma reiterada de torturas como aplicación de corrientes, maltrato verbal, acusaciones sin fundamentos, sometido a tormentos tales como la exposición frente a su esposa de múltiples agresiones. En el mes de mayo del año 1976, sale al exilio y se va a residir a Estados Unidos, donde se inserta en términos



laborales y sociales hasta que le es permitido retornar a Chile. Debó irse al exilio a Estados Unidos, junto a su cónyuge doña Silvia Pavez, también víctima de prisión política y torturas, donde permanecieron varios años adaptándose a una cultura, costumbre e idioma diferente. Por las experiencias vividas y padecimientos sufridos, don Nelson Ricardo Viveros Lagos, doña Silvia Gioconda Pavez Rivera, don Jaime Andrés Malagueño Hormazabal y don Luis Alberto Ramírez Martínez, han sido reconocidos por el Estado de Chile como víctimas calificadas de prisión política y torturas por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, mejor conocida como “Comisión Valech”, con los números 26.642, 18.448, 13.738 y 19942, respectivamente. Tales acontecimientos experimentados por los demandantes les afectó directamente la salud física, psicológica y emocional de manera integral e irreparable, y que ocasionaron secuelas que han permanecido en el tiempo y que han derivado en una interrupción y alteración de la vida, permanente depresión, angustia, sufrimiento y temores, impotencia y el recuerdo de los dolores extremos padecidos, con la consecuente, inestabilidad social y laboral y dificultades para el desarrollo de una vida plena”.

DECIMO.- Que, es posible establecer que estos mismos hechos descritos en los párrafos precedentes, son los que sustentan la acción de indemnización de perjuicios que deducen los demandantes en contra del Fisco de Chile, a raíz de los daños y perjuicios sufridos por don Nelson Ricardo Viveros Lagos, doña Silvia Gioconda Pavez Rivera, don Jaime Andrés Malagueño Hormazabal y don Luis Alberto Ramírez Martínez, por sus repentinos, forzados e injustificados secuestros, torturas, vejámenes, tormentos y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes perpetrados por agentes del Estado, hechos que caben dentro de la calificación de crímenes de lesa humanidad y que constituyen, por ende, una violación grave a las normas internacionales sobre derechos humanos.

UNDECIMO.- Que, el señalado informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, como a su turno la Ley N° 19.123, en cuanto crea la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación estableciendo que como servicio descentralizado le corresponderá promover la reparación del daño moral de las víctimas a que se refiere el artículo 18, remitiéndose luego al artículo 17, norma que se remite a la individualización de las personas que se realiza en el volumen segundo del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, se desprende con claridad que el Estado reconoció la calidad de víctima de violación a los Derechos Humanos o de violencia política a don Nelson Ricardo Viveros Lagos, doña Silvia Gioconda Pavez Rivera, don Jaime Andrés Malagueño Hormazabal y don Luis Alberto Ramírez Martínez, según dan cuenta los certificados individualizados en el motivo Quinto.

DUODECIMO.- Que, de lo reseñado en los motivos precedentes ha quedado establecida la responsabilidad del Estado en el caso en análisis, resultando necesario consignar que en estos autos los actores han accionado de indemnización de perjuicios pretendiendo obtener el resarcimiento de los daños morales sufridos y ocasionados por y a consecuencia del actuar de agentes del Estado en los secuestros, vejámenes, torturas, tormentos y otros tratos crueles, inhumanos y/o degradantes de don Nelson Ricardo Viveros



Lagos, doña Silvia Gioconda Pavez Rivera, don Jaime Andrés Malagueño Hormazabal y don Luis Alberto Ramírez Martínez.

DECIMO TERCERO.- Que, el Fisco de Chile ha deducido la excepción de cosa juzgada de la acción intentada respecto del demandado **Jaime Andrés Malagueño Hormazabal**, en virtud de existir sentencia definitiva ejecutoriada en la materia, habiendo éste ya ejercido una acción por los mismos hechos, al haber deducido acción de indemnización de perjuicios por daño moral en contra del Fisco de Chile en la causa “Salgado y otros con Fisco de Chile”, de la cual conoció el 14° Juzgado Civil de Santiago; bajo el Rol: C-1890-2006, por los apremios ilegítimos que sufrió, dictándose en esos autos, sentencia definitiva que acogió la prescripción de la acción indemnizatoria, confirmada por la Iltna. Corte de Apelaciones de Santiago y rechazada la casación en el fondo deducida en su contra, encontrándose firme y ejecutoriada, y procediendo por ende los requisitos para declarar cosa juzgada de la citada acción, al concurrir las mismas partes, causa de pedir y objeto pedido. Funda la excepción en lo prescrito en el artículo 1567 N° 3 del Código Civil, que indica que la cosa juzgada es un modo de extinguir las obligaciones, cita los artículos 175 y 177 del Código de Procedimiento Civil, y sostiene que se da la triple identidad requerida en cuanto hay identidad legal de personas, pues es el actor individualizado demandante civil en el proceso; siendo además el Fisco de Chile el demandado en dichos juicios, por lo cual coinciden tanto la identidad física como legal-procesal de ambas partes; en cuanto a la identidad legal de cosa pedida: siendo la indemnización por daño moral por responsabilidad civil extracontractual objetiva e imprescriptible del Fisco de Chile, lo demandado en ambos procesos; y en cuanto la causa de pedir es el mismo delito por los apremios ilegítimos o torturas que habría sufrido en manos de agentes del Estado.

DECIMO CUARTO.- Que, al efecto es necesario tener presente que de acuerdo a lo previsto en el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, las sentencias definitivas o interlocutorias firmes producen la acción o la excepción de cosa juzgada. Por su lado, el artículo 177 del mismo cuerpo legal, indica que la excepción de cosa juzgada puede alegarse por el litigante que haya obtenido en el juicio y por todos aquellos a quienes según la ley aprovecha el fallo, siempre que entre la nueva demanda y la anteriormente resuelta haya: 1° identidad legal de personas; 2° identidad de la cosa pedida; y 3° identidad de la causa de pedir.

DECIMO QUINTO.- Que, de la prueba aportada por la demandada, entre esta, imagen digitalizada de fallo de fecha 05 de julio de 2011 y sentencia complementaria de fecha 28 de agosto de 2013, dictada por el 15° Juzgado Civil de Santiago, en causa Rol C-1890-2006, caratulada Salgado Salgado con Fisco de Chile, en la que figura como demandante de la acción de indemnización de perjuicios por daño moral por responsabilidad extracontractual don Jaime Malagueño Hormazabal, entre otros, por la que se acoge la excepción de prescripción deducida por el Fisco de Chile y rechaza las excepciones de falta de legitimidad activa y excepción de pago y sentencia definitiva de segunda instancia dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 10 de enero de 2014, por la que confirma la sentencia apelada, se desprende con claridad que si bien se configuraría la excepción



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JWCLXFRKPEX

de cosa juzgada por concurrir los presupuestos fácticos contemplados en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, es de opinión de esta sentenciadora siguiendo jurisprudencia de los tribunales superiores nacionales que se han pronunciado en ese sentido que, la institución de la cosa juzgada no puede excusar al Estado del deber de reparar íntegramente los daños causados con las violaciones de derechos humanos cometidas por sus agentes. Al efecto, resulta dable repasar que, el **artículo 1° de la Convención Americana de Derechos Humanos** establece con claridad las obligaciones más importantes que nacen para los Estados partes, estas son, las de respetar los derechos humanos y garantizar su ejercicio y goce, por consiguiente, convencionalmente para el Estado de Chile y demás Estados partes, las consecuencias o efectos jurídicos de estas obligaciones son la exigibilidad inmediata de respeto de los derechos humanos y en el plano individual la tiene frente a todas las personas que estén sujetas a su jurisdicción, sin discriminación alguna, por lo que la obligación de respetar dicho ejercicio y goce, exige al Estado y a todos sus agentes abstenerse de violar los derechos humanos establecidos en la Convención Americana. Por su parte, la obligación de garantizar, exige al Estado el deber ineludible de emprender las acciones necesarias para asegurar que todas las personas sujetas a su jurisdicción, siempre estén en condiciones de ejercerlos y de gozarlos en forma íntegra. A mayor abundamiento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sostenido en sus innumerables fallos que dicha obligación implica que el Estado está obligado a organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, así como consecuencia de esa obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, “la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos.”, siendo en ese orden de ideas, que de acuerdo al deber de todos los órganos del Estado de respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados por la Constitución Política de la República, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, el Estado debe cumplir con las normas sobre derechos humanos y al implícitamente no hacerlo luego del requerimiento, al controvertirse por cualquier medio tal principio de favorabilidad que protege a la persona afectada, se debe aplicar por el tribunal el derecho interno de conformidad y en armonía con dichas normas internacionales de los derechos humanos, cumpliendo así con la obligación de hacer el adecuado control de Convencionalidad, interpretando y aplicando las normas nacionales que pudieren afectar derechos humanos de acuerdo con las obligaciones internacionales contraídas en la materia y ello sin que ninguna norma del derecho interno permita alguna distinción que vaya en contra del cumplimiento de tal responsabilidad.

DECIMO SEXTO.- Que asimismo es un principio general de Derecho Internacional, el que los Estados se obligan a cumplir los tratados de buena fe por lo que el Estado no puede descansar en la imposibilidad de cumplir con sus



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JWCLXFRKPEX

obligaciones internacionales, porque se lo impide su legislación interna (artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados), dado que tiene que observar las disposiciones del tratado en toda su integridad, más aún si el tratado a aplicar ha recibido toda la fuerza legal interna al haber sido ratificado y haber cumplido todos los trámites establecidos en el ordenamiento jurídico para su promulgación.

DECIMO SEPTIMO.- Que, por todas las razones antes expuestas y debiendo el Estado ceder ante el derecho a una reparación integral derivado de los tratados internacionales en materia de derechos humanos ya referidos, que por disposición del inciso 2° del artículo 5° de nuestra Carta Fundamental tienen una jerarquía superior, es que se desestimaré la excepción de cosa juzgada de la acción de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual interpuesta en estos autos en representación de don Jaime Andrés Malagueño Hormazabal.

DECIMO OCTAVO.- Que, solicitando el rechazo de la demanda deducida de contrario el Fisco de Chile ha interpuesto la excepción de improcedencia de la indemnización por haber sido preteridos legalmente los demandantes, fundado en que los actores ya han sido indemnizados en conformidad a la Ley 19.123, en los términos analizados en el motivo Segundo del presente fallo.

DECIMO NOVENO.- Que, atendida la naturaleza de la reparación integral establecida en la Ley 19.123 y sus modificaciones, otorgada en forma voluntaria por el Estado de Chile en el marco de cumplimiento de tratados internacionales ratificados por Chile, y que en ella misma establece que los beneficios por ella otorgados no son incompatibles con otras reparaciones, siempre reconociendo el principio de reparación integral que sostiene el ordenamiento regulatorio internacional de los Derechos Humanos, no resulta suficiente en modo alguno para fundamentar una excepción en los términos como lo ha hecho la demandada. Así, es necesario precisar que la normativa invocada por el Estado, que solo establece pensiones y bonos asistenciales, no contempla incompatibilidad alguna con la indemnización que en esta causa se persigue, (artículo 24) sin que ella haya sido otorgada para reparar todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los Derechos Humanos, tratándose de distintas formas de reparación, no importando en caso alguno la renuncia de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare la procedencia de una indemnización total por daño moral, por los medios que autoriza el ordenamiento jurídico. Que, por lo demás, a juicio de esta sentenciadora, y a mayor abundamiento específicamente en el caso de autos, en cuanto a los demandantes don Nelson Ricardo Viveros Lagos, doña Silvia Gioconda Pavez Rivera, don Jaime Andrés Malagueño Hormazabal y don Luis Alberto Ramírez Martínez, en sus calidades de víctimas directas de violaciones a los Derechos Humanos, sin perjuicio de haber sido beneficiarios de una pensión mensual de reparación conforme a la Ley 19.123, cuyo establecimiento tuvo el propósito de “desagravio, satisfacción completa de la ofensa, daño o injuria”, sí resulta procedente que sean resarcidos del evidente daño moral que en diversas dimensiones han padecido y encontrándose acreditado en autos la perpetración de los delitos de secuestros, vejámenes, torturas, tormentos y tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, en sus



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JWCLXFRKPEX

personas, así como la participación en el mismo de agentes determinados e individualizados del Estado en sus calidades de Garantes de la seguridad pública, dependiente del Estado de Chile, existe por ende el daño moral comentado, el cual como se dijo, no solo debe ser reparado por los otros beneficios sociales contemplados en la Ley 19.123, sino que, también debe ser reparado y regulado prudencialmente de acuerdo a los criterios imperantes en nuestro ordenamiento jurídico y el principio de equidad. Así, acorde con lo razonado anteriormente, resulta procedente rechazar la excepción opuesta por el Fisco de Chile.

VIGESIMO.- Que, en segundo término, el Fisco de Chile ha deducido la excepción de prescripción extintiva de la acción intentada, ello conforme lo establecido en el artículo 2.332 del Código Civil, en relación a lo dispuesto en el artículo 2.497, en los términos latamente expuestos en el motivo Cuarto de esta sentencia, sosteniendo que teniendo en consideración la fecha en que se produjeron los hechos en que se fundan las acciones desde el mes de abril de 1975 hasta final del año 1976, y aun entendiendo suspendido el plazo de prescripción hasta la restitución de la democracia, 11 de Marzo de 1990, a la fecha de notificación de la demanda, 24 de enero de 2020, ha transcurrido en exceso el plazo que establece el artículo 2.332 del Código Civil. En subsidio, opone la prescripción extintiva de cinco años contemplado para las acciones y derechos por el artículo 2.515, en relación al artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a la indemnización y la fecha de notificación de la demanda ya referida, transcurrió con creces el plazo establecido en el artículo 2.515.

VIGESIMO PRIMERO.- Que, a efectos del debido análisis de la excepción en comento, es necesario tener presente que el fundamento jurídico de la acción deducida en autos lo sitúa los actores en la responsabilidad del Estado por el daño moral en el Derecho Administrativo y Derecho Constitucional, en razón del hecho propio del Estado al haber actuado como órgano, cometiendo un ilícito a través de sus agentes, y estableciendo como autores del mismo a personal del Ejército y de Carabineros, en servicio al momento de los hechos y que como se señalare en los motivos precedentes, estos mismos hechos que sustentan la acción de indemnización de perjuicios que deducen los demandantes en contra del Fisco de Chile, caben dentro de la calificación de crímenes de lesa humanidad y que constituyen, por ende una violación grave a las normas internacionales sobre derechos humanos, y que, a través de los elementos probatorios ya ponderados, permiten desprender con claridad que el Estado reconoció la calidad de víctima de violación a los Derechos Humanos o de violencia política a don Nelson Ricardo Viveros Lagos, doña Silvia Gioconda Pavez Rivera, don Jaime Andrés Malagueño Hormazabal y don Luis Alberto Ramírez Martínez. En consecuencia, se demuestra que se está en presencia de afectados por delitos de lesa humanidad, de manera que el derecho de las víctimas de este tipo de ilícitos encuentra su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y normativa de los tratados internacionales ratificados por nuestro país, los cuales obligan al Estado de Chile a reconocer y proteger el derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en



nuestra carta fundamental, en la especie inciso 2° de los artículos 5 y 6 de la Constitución Política de la República.

VIGESIMO SEGUNDO.- Que, sentado así lo anterior, corresponde continuar analizando la excepción de prescripción opuesta por el Fisco de Chile, haciendo presente que tratándose de delitos de lesa humanidad, su acción persecutoria es imprescriptible, más aun si tratándose en la especie de una demanda de indemnización por daño moral sustentada fehacientemente en la comisión por parte de agentes del Estado de delitos de secuestro simple, de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, por lo que necesariamente se deberá desestimar la excepción de prescripción opuesta por la demandada. Que, de este modo, dada la especial naturaleza de los ilícitos cometidos, lo que surge de los hechos que se han establecido, no controvertidos por el demandado, aparece que ellos, que son el fundamento de la demanda, constituyen crímenes de lesa humanidad y, por ende, una violación grave a las normas internacionales sobre Derechos Humanos, por lo que resulta improcedente declarar la prescripción de la acción indemnizatoria ejercida, como se dirá.

VIGESIMO TERCERO.- Que, en efecto, en la clase de delitos por los cuales se sustenta la acción indemnizatoria reclamada, y en que la acción penal persecutoria es imprescriptible, no es coherente entender que la acción civil que de ellos deriva esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que en virtud de la Ley N° 19.123 reconoció de manera explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de las víctimas calificadas como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, reconocidos por los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, beneficios de carácter económico o pecuniario. A mayor abundamiento, es necesario tener asimismo presente que, pesando sobre el Estado el deber de reparar a la víctima, este deber encuentra también su consagración en el derecho interno en el sistema de responsabilidad del Estado que deriva además del artículo 3 de la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en cuanto dispone que la administración del Estado está al servicio de la persona humana, que su finalidad es promover el bien común, y que uno de los principios a que debe sujetarse es el de la responsabilidad, lo que recoge expresamente en su artículo 4. Por consiguiente, cualquier diferenciación entre ambas acciones, y otorgarles un tratamiento desigual es discriminatorio y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama.

VIGESIMO CUARTO.- Que, a mayor abundamiento y sin perjuicio de lo ya expresado, corresponde señalar que los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, consagran que la



responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, de modo que estas no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, toda vez que, si se verifica un hecho ilegítimo imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma de esa índole, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación. En el mismo sentido la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, vigente en nuestro país desde el 27 de enero de 1980, establece en su artículo 27 que el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones. En este sentido autores como Humberto Nogueira Alcalá, "Las Constituciones Latinoamericanas" en Anuario de derecho Constitucional Latinoamericano, Edición 2000 ha señalado que de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete la responsabilidad internacional del mismo.

VIGESIMO QUINTO. - Que, en consecuencia, solo corresponde como se señaló, desestimar la excepción de prescripción opuesta por el demandado de autos, tanto la excepción formulada por vía principal como aquella formulada por vía subsidiaria.

VIGÉSIMO SEXTO.- Que, encontrándose establecida la comisión de hechos ilícitos por agentes del Estado, de la cual surge la responsabilidad del Estado conforme a lo establecido en el artículo 38 inciso segundo de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental en cuanto prescribe que los órganos del Estado deben someter su acción a la constitución y a las leyes, y son responsables de sus actos de acuerdo a la ley, como asimismo a lo establecido en el artículo 4 de la ley 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado al disponer que *"El Estado será responsable de los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran afectar al funcionario que las hubiere realizado"*. Cabe señalar que el citado principio se ve reiterado en el artículo 44 del mismo texto legal. Al efecto, de las normas citadas en el párrafo precedente, solo es dable concluir que tanto el constituyente como el legislador ha expresado en forma inequívoca su intención de que el Estado se haga responsable del actuar de sus agentes, cuando éste ocasiona un daño al administrado, responsabilidad que por su naturaleza cae en el ámbito de la responsabilidad extracontractual.

VIGESIMO SEPTIMO.- Que, necesario resulta a continuación, el análisis del daño cuyo resarcimiento se pretende por los actores, en cuanto presupuesto necesario para que surja la obligación de indemnizar los perjuicios que se intenta en esta causa. Al efecto es necesario precisar que se trata en la especie del resarcimiento del daño moral, que requiere que el mismo sea cierto, vale decir, que sea real y no hipotético, recordando que el daño moral consiste, equivale y tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física, y/o en los sentimientos o afectos de una persona. El daño moral, es en consecuencia, toda lesión causada culpable o dolosamente que signifique molestias, perturbación en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes o en un agravio a sus afecciones legítimas, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial o inherente a la



persona e imputable a otra, daño que no es de naturaleza propiamente económica y que no implica, un deterioro o menoscabo real y directo en el patrimonio de la misma, susceptible de prueba y determinación directa, sino que posee una naturaleza eminentemente subjetiva.

VIGESIMO OCTAVO.- Que, atendidas las particularidades reseñadas en el motivo precedente, es dable desprender que la comprobación de la inobservancia o agravio del derecho subjetivo envuelve al mismo tiempo, la prueba de la efectividad del daño moral, de suerte que comprobada la existencia de un delito, como es el caso de autos, forzoso es concluir que se ha producido un daño y que debe ser reparado, toda vez que no podría ser de otra manera, en tanto, materialmente resulta extremadamente difícil, medir con exactitud la intensidad con que las lesiones han afectado a la víctimas, en este caso los actores, por la naturaleza del perjuicio provocado. Por ello, la naturaleza del dolor no hace indispensable la prueba del mismo, sino que se trata de un hecho evidente que las lesiones físicas y mentales sentidas, experimentadas por el sujeto causan un sufrimiento, que no requiere de evidencia, pero que en todo caso debe ser indemnizado por quien los ocasionó, tomando en cuenta todos los antecedentes reunidos y debiendo hacerse una apreciación equitativa y razonable por el tribunal.

VIGESIMO NOVENO.- Que, en el caso de autos, en relación al daño sufrido por los actores don Nelson Ricardo Viveros Lagos, doña Silvia Gioconda Pavez Rivera, don Jaime Andrés Malagueño Hormazabal y don Luis Alberto Ramírez Martínez, en sus calidades de víctimas directas de violaciones a los Derechos Humanos, quienes a la fecha de sus detenciones, secuestros, torturas, tormentos y tratos crueles, inhumanos y degradantes, acontecidos el 27 de mayo de 1975, 26 de mayo de 1975, 11 de mayo de 1975, y en el transcurso del mes de abril del año 1975, respectivamente, se encontraban forjando sus proyectos de vida tanto familiares como profesionales, algunos de ellos padres y jefes de familia, estudiantes, profesionales y trabajadores, siendo detenidos, secuestrados, torturados y sometidos a tormentos, tratos crueles, inhumanos y degradantes y otros agravios, por efectivos de la policía secreta de la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile entre 1973 y 1977, de nombre Dirección de Inteligencia Nacional, también conocida por su acrónimo DINA y militares del Ejército de Chile, ilegítima y arbitrariamente privados de libertad, permaneciendo en cautiverio por más de un año en diferentes centros clandestinos de detención y torturas y campos de concentración, es dable presumir que les produjo un gran dolor, angustia, aflicción, inseguridad y natural temor al momento de producirse los hechos y que innegablemente se ha prolongado a lo largo de sus vidas, más aun considerando las circunstancias particulares padecidas por los actores quienes se vieron sometidos a martirios y dolores extremos, sobrevivieron a amenazas vitales, enfrentados a proyectos de vida y laborales conculcados, tuvieron que vivir una vida constantemente incierta, forzadamente vivieron en el exilio, en una perpetua transitoriedad, separados de sus seres queridos, desarraigados de su país y de sus vidas y cargando el inconsolable dolor y angustia de haber sido víctima de los peores agravios propinados por los agentes de Estado, conclusión que se ve inequívocamente corroborada con los informes psicológicos referidos en el motivo Quinto y que se infieren necesariamente por



los testimonios analizados en el motivo Sexto, que dan cuenta de los padecimientos sufridos, las alteraciones de carácter, de salud, temores y angustias permanentes sufridos por los actores durante años, y constatado por profesionales de la salud, que se prolongaron desde la época de los hechos y que tuvo consecuencias graves en la salud de los demandantes que sirven de sustento a la presente demanda, circunstancias que en los informes emitidos acerca de las secuelas de las víctimas y de los familiares de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, revelan los daños experimentados a lo largo de los años por los demandantes a consecuencia de los ilícitos que motiva la presente causa. Cabe destacar que, por la naturaleza de los ilícitos que afectaron a los demandantes, las circunstancias de los mismos, los acontecimientos sociales históricos de nuestro país que han permitido en algunos casos, más de cuarenta años después, conocer algunas circunstancias de las desapariciones y la ubicación de los restos mortales de algunas de las víctimas, permiten desprender en forma inequívoca la angustia permanente seguidas de las referidas experiencias traumáticas, constante que en mayor o menor medida, les ha acompañado durante el devenir de sus vidas.

TRIGÉSIMO.- Que, encontrándose acreditado que los actores sufrieron una lesión o detrimento en sus personas, en el desarrollo de las mismas, lo que es dable presumir desde las máximas de experiencia y la naturaleza de los hechos acreditados en autos, les afectó su integridad psicológica, física, su libertad, sus afectos, estabilidad y unidad familiar, esto es, en general, los atributos o cualidades morales de sus personas, con las consiguientes repercusiones en la normalidad de su existencia, necesario resulta acceder a la demanda de indemnización del daño moral experimentados, el que atendido los antecedentes que obran en el proceso y que han sido reseñados en los motivos anteriores, se accederá a la demanda de autos, teniendo presente los criterios de coherencia en la interpretación de los antecedentes, fijando a título de indemnización de perjuicios por el daño alegado prudencialmente teniendo presente las circunstancias de cada uno de los actores, el periodo de privación de libertad entre otros ya reseñados precedentemente, la suma única y total \$80.000.000.- (ochenta millones de pesos) para el actor don **Nelson Ricardo Viveros Lagos**; la suma única y total \$70.000.000.- (setenta millones de pesos) para la demandante doña **Silvia Gioconda Pavez Rivera**; la suma única y total de \$80.000.000 (ochenta millones de pesos) para el actor don **Jaime Andrés Malagueño Hormazabal**; y la suma única y total de \$80.000.000.- (ochenta millones de pesos) para el actor don **Luis Alberto Ramírez Martínez**.

TRIGESIMO PRIMERO.- Que, debiendo pagar la demandada las sumas de dinero ordenadas pagar en el motivo precedente, ello deberá efectuarse debidamente reajustadas de acuerdo a la variación que experimente Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de la presente sentencia y aquella en que efectivamente se realice el pago, más intereses corrientes para operaciones reajustables, según liquidación que se practicará en su oportunidad.

Y, vistos, además, lo dispuesto en los artículos 1437, 1698, y siguientes del Código Civil; 144, 159, 254 y siguientes, 342, 346 N° 3, 384, 430,



748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; Ley 19.123; artículo 5 y 6 de la Constitución Política de la República, **se declara:**

I.- Que, se rechazan las excepciones opuestas por el Fisco de Chile, de cosa juzgada opuesta respecto del actor don Jaime Andrés Malagueño Hormazabal y las de improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizados los demandantes y prescripción extintiva de la acción civil de indemnización de perjuicios, ésta última, en ambas acepciones opuestas, de acuerdo a lo consignado en los motivos Décimo Quinto, Décimo Sexto, Décimo Séptimo, Décimo Noveno, Vigésimo Primero, Vigésimo Segundo, Vigésimo Tercero, Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto, respectivamente.

II.- Que se acoge, con costas, la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta a folio 1, en cuanto la demandada deberá pagar al actor don **Nelson Ricardo Viveros Lagos**, la suma única de \$80.000.000.-(ochenta millones de pesos); al actor doña **Silvia Gioconda Pavez Rivera**, la suma única de \$70.000.000.-(setenta millones de pesos); al actor **don Jaime Andrés Malagueño Hormazabal**, la suma única de \$80.000.000.-(ochenta millones de pesos); y al actor don **Luis Alberto Ramírez Martínez**, la suma única de \$80.000.000.-(ochenta millones de pesos); por conceptos de daño moral, con reajustes e intereses en la forma indicada en el motivo Trigésimo Primero.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Dictada por doña Jacqueline Dunlop Echavarría, Juez Titular.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, nueve de Junio de dos mil veintitrés**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JWCLXFRKPEX



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JWCLXFRKPEX